



# GACETA DEL CONGRESO

## SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXX - Nº 953

Bogotá, D. C., jueves, 5 de agosto de 2021

EDICIÓN DE 29 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO  
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO  
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO  
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA  
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

# CÁMARA DE REPRESENTANTES

## PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA

### PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 143 DE 2021 CÁMARA

*por la cual se crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones.*

**PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA N° \_\_\_\_\_ “POR LA CUAL SE CREA UNA ESPECIALIDAD JUDICIAL AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECEN LOS MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS AGRARIOS Y RURALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.**

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

##### 1. Antecedentes

##### 1.1 Múltiples intentos por crear jueces para resolver asuntos agrarios

La creación de medidas institucionales para resolver los conflictos sobre la propiedad, el uso y la tenencia del suelo rural ha sido una iniciativa presente, pero no resuelta, desde la primera mitad del siglo XX. A través de la Ley 200 de 1936 se crearon jueces con funciones similares a las de los de competencia civil para conocer los procesos posesorios, los deslindes, la prescripción adquisitiva y las acciones de protección a la posesión<sup>1</sup>. Estos jueces, sin embargo, no tenían ninguna función en relación con la implementación de la llamada “reforma agraria” propuesta por la ley 200. Su existencia fue corta, pues en 1943 mediante la Ley 4 desaparecieron y las competencias fueron reasignadas a los jueces civiles. Posteriormente, como un intento por hacer énfasis en las competencias agrarias de la jurisdicción ordinaria, en 1973 se creó la Sala Agraria en la Corte Suprema de Justicia<sup>2</sup>.

La intención de crear despachos judiciales para atender los problemas sobre la tierra rural fue retomada en 1989 mediante el Decreto Ley 2302 que dispuso la creación de 23 salas agrarias, 52 magistrados, 115 juzgados. Las competencias que se les asignaron iban un paso más allá de la disputa de asuntos cercanos a los resueltos por los jueces civiles y pretendió enfocarse

<sup>1</sup> Parra, A. La Jurisdicción Agraria: la deuda histórica que hoy se debate entre la especialidad y la jurisdicción (2021). Disponible en: <https://medioambiente.uexternado.edu.co/la-jurisdiccion-agraria-la-deuda-historica-que-hoy-se-debate-entre-la-especialidad-y-la-jurisdiccion/>

<sup>2</sup> Mojica, J. La utópica jurisdicción agraria en Colombia. (2021). Disponible en: <https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/la-utopica-jurisdiccion-agraria-en-colombia/>

de manera más amplia en la conflictividad agraria. No obstante, nunca fue plenamente implementado y se quedó en un piloto<sup>3</sup>.

Posteriormente reformas a la norma estatutaria de la administración de justicia (Ley 270/1996) y a las regulaciones procedimentales (Ley 1285/2009, Ley 1395/2010 y Ley 1564/2012) eliminaron todos los vestigios de la jurisdicción creada en 1989 y trasladaron definitivamente las competencias a los jueces ordinarios.

##### 1.2 El Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP

El Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en el 2016 tiene un enfoque integral que busca atender a las circunstancias que han permitido la permanencia del conflicto armado en Colombia. En ese sentido, el acuerdo sobre desarrollo rural integral, además de incluir medidas para garantizar bienes y servicios para los habitantes de las zonas rurales, prevé la creación de una jurisdicción agraria.

El propósito de crear una jurisdicción agraria va de la mano con la idea que subyace al Acuerdo de Paz de la necesidad de fortalecer la presencia institucional del Estado en todo el territorio de Colombia, en particular en las zonas rurales<sup>4</sup>. Asimismo, también recae sobre la necesidad de ofrecer alternativas institucionales y en el marco de la legalidad para resolver la conflictividad que surja del uso, la tenencia, la propiedad y las relaciones agrarias, que de no canalizarse podrían escalar y resultar en distintas formas de violencia.

En esa lógica, la intención de crear una jurisdicción agraria debe entenderse e implementarse como parte de un grupo de medidas que buscan mejorar las condiciones de los habitantes de las zonas rurales, a través del acceso a bienes y servicios ofrecidos y garantizados por el Estado mediante instituciones consolidadas y con suficiente presencia territorial.

En concreto, el Acuerdo dispone:

“(…) Además, pondrá en marcha con igual propósito, una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> Bermúdez, A. (ed) Los debates de la Habana: una mirada desde adentro. (2018) IFIT

<p>las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra. Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra.” (p.18)</p> <p>El compromiso previsto en el Acuerdo se suma a las iniciativas propuestas el siglo pasado para atender a la conflictividad particular que surge en las zonas rurales. En ese sentido, además de referirse a la creación de jueces especializados, enfatiza en el deber de que el acceso a la justicia sea efectivo y, además, en la necesidad de incorporar medidas con enfoque de género que den cuenta de que las mujeres en la ruralidad han enfrentado barreras particulares para el ejercicio de sus derechos, donde se incluyen el acceso a la justicia y a la propiedad.</p> <p>1.3 Otros antecedentes legislativos</p> <p>En la legislatura 2020-2021 el Gobierno Nacional, a través de la entonces Ministra de Justicia, Margarita Cabello, radicó el proyecto de ley estatutaria 134-Cámara, 395- Senado que buscaba establecer las normas procesales para una especialidad agraria. El proyecto alcanzó a ser aprobado en tres de cuatro debates.</p> <p>Al respecto, es importante destacar lo que señalaron diversos sectores en los espacios de las audiencias públicas convocadas en ambas cámaras respecto a la conveniencia del proyecto. En el desarrollo de la audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y el Foro Ciudadano que se llevó a cabo en el Senado respecto a aquel proyecto, realizadas el 5 de octubre de 2020 y el 30 de abril de 2021, se tuvo la oportunidad de escuchar la opinión de expertos en materia agraria, derecho constitucional y representantes de distintas entidades públicas. En sus intervenciones, los participantes coincidieron en tres razones por las cuales consideraron necesario aprobar el proyecto que crea una especialidad agraria en la justicia ordinaria.</p> <p>El argumento con mayor acogida entre los participantes fue la deuda histórica que tiene el Estado con la población rural del país. Según las intervenciones, el acceso a la justicia es un derecho fundamental constantemente vulnerado en territorio rural debido a la poca cobertura institucional en dichas zonas. De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura “mientras que a nivel nacional hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, en los municipios sólo hay 6 jueces por cada 100.000 habitantes” (Andrés García, 2021). En ese sentido, el Proyecto de Ley respondería a dicha falencia al aumentar la oferta institucional en el territorio y, en consecuencia, garantizar el acceso a la justicia material, permitiendo así la resolución de</p>	<p>conflictos respecto a la tenencia y propiedad de la tierra. Adicionalmente, se destacó que el desarrollo de la justicia agraria permitiría cumplir con la obligación del Acuerdo Escazú consistente en garantizar el acceso a la justicia ambiental, esto toda vez que son materias correlacionadas.</p> <p>Un segundo punto relevante fue la necesidad de implementar una especialidad judicial ajustada al contexto social colombiano. Los episodios de violencia que destacan en la historia del país, particularmente en zona rural, encuentran una de sus causales en los conflictos respecto a la tenencia de la tierra. En el marco de dicha violencia, se evidenciaron posiciones de poder y de desventaja en la lucha por la propiedad de la tierra. En ese sentido, uno de los principales inconvenientes en la resolución de conflictos agrarios por medio de la justicia civil es la asunción de partes iguales dentro del proceso. La justicia agraria permitiría tener en cuenta la relación desigual que se presenta en este tipo de conflictos (Aura Bolívar). Adicionalmente, los exponentes argumentaron que un juez especializado en materia agraria estaría particularmente capacitado para aplicar la ley en el marco de la vulneración constante de derechos fundamentales entorno a dichos conflictos.</p> <p>Por último, se identificó que la especialidad de la justicia en materia agraria daría paso a distintos efectos de carácter económico. Según lo expuesto por Guillermo Otálora, abogado constitucionalista, el acceso a la justicia, la clarificación en los títulos de pertenencia y el ordenamiento de los registros de catastro son consecuencias de una justicia especial agraria que garantiza la seguridad jurídica de los emprendedores campesinos y demás interesados en el mercado agrario, lo cual impulsa el desarrollo del campo. De la mano con dicha postura, Miguel Samper, de la organización Gestión Rural, destacó el papel que llevan a cabo los jueces especializados en promover la estabilidad de la gestión desarrollada por las entidades gubernamentales en materia agraria, lo que, a su vez, garantiza la seguridad jurídica mencionada por el experto constitucionalista.</p> <p><b>2. Justificación</b></p> <p>2.1 Acceso a la justicia en zonas rurales</p> <p>En términos institucionales, las zonas rurales están en una situación desigual respecto a las urbanas. En concreto, respecto al acceso al sistema judicial, la tasa nacional es de once jueces</p>
<p>por cien mil habitantes, mientras que en los municipios PDET (programas de desarrollo con enfoque territorial)<sup>5</sup> es de seis<sup>6</sup>.</p> <p>Respecto a la oferta actual que tiene una relación más directa con conflictos sobre la tierra rural, a saber, los jueces y magistrados de restitución de tierras, las cifras no son mejores para los municipios PDET. El 78,2% de estos los municipios PDET y el 95,8% de los municipios PDET no cuentan con jueces itinerantes del circuito especializados en tierras. Lo anterior, pese a la particular afectación del conflicto sobre tales territorios.</p> <p>En relación con otro tipo de oferta para la resolución de conflictos, el 81,2% de los municipios PDET no cuenta con Centros de Conciliación<sup>7</sup> y el 72,4% no cuenta con Casas de Justicia o Centros de Convivencia Ciudadana<sup>8</sup>.</p> <p>Respecto a las necesidades jurídicas, si bien el porcentaje de personas que enfrentaron al menos un problema, desacuerdo, conflicto o disputa a nivel nacional (17,1%) es mayor que en las zonas rurales (11,7%), la tasa de denuncia en las zonas rurales (27,6%) es 3 puntos porcentuales menor que a nivel nacional (30,2%)<sup>9</sup>.</p> <p>Por otro lado, en parte por la debilidad institucional, al analizar por ruta de acción tomada, apenas un tercio de las personas a nivel nacional que presentaron al menos un problema, desacuerdo, conflicto o disputa acudieron a una institución, autoridad o persona particular, y el 42,1% reportó no haber hecho nada. Estos porcentajes son similares en las zonas rurales<sup>10</sup>. De los registros de acceso a las medidas institucionales, en relación con el estado de solución</p> <p><sup>5</sup> Los PDET son una medida prevista en el Acuerdo de Paz para lograr la transformación estructural de la ruralidad. Se previó que su implementación estaría focalizada en 16 regiones, formadas por 170 municipios en los cuales confluyen altos niveles de pobreza, mayores afectaciones por el conflicto, debilidad institucional y presencia de economías ilegales. El listado de los municipios está previsto en el Decreto ley 893 de 2017.</p> <p><sup>6</sup> Elaboración propia a partir del Derecho de Petición Ministerio de Justicia y del Derecho. Radicado No. MJD-OFI20-0005752-VPJ-2000. 21 de febrero de 2020.</p> <p><sup>7</sup> Elaboración propia a partir del Derecho de Petición Ministerio de Justicia y del Derecho. Radicado No. MJD-OFI20-0005752-VPJ-2000. 21 de febrero de 2020.</p> <p><sup>8</sup> Elaboración propia a partir del Derecho de Petición Ministerio de Justicia y del Derecho. Radicado No. MJD-OFI20-0005752-VPJ-2000. 21 de febrero de 2020.</p> <p><sup>9</sup> DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019.</p> <p><sup>10</sup> DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019.</p>	<p>del problema, a nivel nacional apenas el 24% reportó que el problema se solucionó, el porcentaje en zonas rurales es similar (23%)<sup>11</sup>.</p> <p>En particular, respecto a los conflictos sobre la tierra, en las zonas rurales es tres veces mayor que en las urbanas. Así, mientras que a nivel nacional el 0,1% de las personas que han experimentado un problema, desacuerdo, conflicto o disputa corresponden a problemas de propiedad, uso y tenencia de la tierra, en los centros poblados y rural disperso esta cifra corresponde a 0,3%<sup>12</sup>. Respecto a los mecanismos para resolver los conflictos sobre la tierra el 43,7% acudió a una institución, autoridad o persona particular, y el 31,2% reportó no haber hecho nada<sup>13</sup>. Y de las que reportaron haber tenido problemas de este tipo, menos de un tercio (31,2%) reportó que se solucionó<sup>14</sup>.</p> <p>Resalta que las personas a nivel nacional que experimentaron un problema de propiedad, uso y tenencia de la tierra y acudieron a una institución o entidad, reportaron que acudieron a diversas instituciones o entidades, pues no hay una entidad o institución típica a la que acudan las personas que presentan este problema. Estas personas recurrieron a las siguientes instituciones o entidades: abogado; alcaldías o gobernaciones; catastros, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Curadurías Urbanas o lonjas; Defensoría del Pueblo; e inspección de Policía. Y, cero personas acudieron a juzgados o jueces<sup>15</sup>.</p> <p>La información presentada muestra un escenario en el que las personas carecen de vías institucionales para resolver los conflictos en la ruralidad y el vacío que existe en proveer servicios judiciales especializados para resolver conflictos sobre la tierra en zonas rurales.</p> <p>2.2 Experiencias comparadas</p> <p>En la región, existen diversos países con experiencias en jurisdicciones y modelos agrarios para la justicia, en los cuales se advierte la prevalencia de principios como la oralidad y la</p> <p><sup>11</sup> DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019.</p> <p><sup>12</sup> DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019.</p> <p><sup>13</sup> DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019.</p> <p><sup>14</sup> DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019.</p> <p><sup>15</sup> DANE, 2020. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Información 2020 con periodo de referencia 2019.</p>

<p>inmediación, la gratuidad y distintas concepciones sobre la protección a la parte más débil del proceso. Además, estas experiencias proporcionan herramientas importantes en términos de mecanismos alternativos de solución de los conflictos agrarios antes de iniciar los procesos judiciales.</p> <p>2.2.1 México</p> <p>Hasta 1992, en México los conflictos sobre la tenencia de la tierra eran resueltos por autoridades administrativas que dependían del poder ejecutivo. En ese año, la Ley Orgánica de Tribunales Agrarios los designó para la administración de justicia en todo el territorio nacional, de manera que se pudiera resolver de forma ágil y efectiva los conflictos relacionados con la tierra y las relaciones que se desprenden de esta; garantizar certidumbre jurídica e impulsar un desarrollo para el sector agrario.</p> <p>Basada en principios como la gratuidad, la oralidad, inmediatez, libre valoración probatoria, igualdad entre las partes garantizando la intervención en escenarios de desequilibrio, la accesibilidad y la protección a los débiles y pobres, la justicia agraria en México busca “sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones” de la ley.</p> <p>De esta manera, la jurisdicción agraria la componen tribunales unitarios y tribunales superiores agrarios. Los primeros cuentan con competencia para conocer de asuntos de límites de tierras, restitución, régimen comunal, nulidades de contratos agrarios, contratos de asociación y aprovechamiento de tierras; también para conocer de recursos de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias; conflictos relacionados con la tenencia de tierras ejidales y comunales; controversias entre ejidatarios, comuneros, avcendados; entre otros.</p> <p>Por otro lado, los Tribunales Superiores Agrarios son los encargados de conocer de recursos de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios o de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias; además, conocen de conflictos de competencia entre los tribunales unitarios y se encargan del establecimiento de jurisprudencia.</p> <p>En cuanto al procedimiento, la ley agraria establece disposiciones especiales de acuerdo con las diferentes etapas del proceso. Además, existe la posibilidad de que los asuntos no regulados sean tramitados mediante lo establecido por la norma general procesal del Estado.</p>	<p>Otros elementos para destacar del procedimiento incluyen el papel fundamental de los jueces agrarios en la solución alterna de controversias, así como de los procuradores agrarios, quienes tienen la capacidad de actuar como conciliadores antes de iniciar el proceso judicial agrario. Por último, vale la pena resaltar que la justicia agraria mexicana fomenta el acercamiento de los Magistrados agrarios a los lugares en que se suscitan los problemas, así como a la información que requieren en relación con los asuntos que se tramitan en los Tribunales (papel clave de la itinerancia).</p> <p>2.2.2 Bolivia</p> <p>Las leyes 1715 de 1996 y 3545 de 2006 (que modifica la primera), establecen un procedimiento agrario y dan competencia a la judicatura agraria para la resolución de conflictos sobre la actividad agraria, forestal y de uso y aprovechamiento de aguas<sup>[1]</sup>. Además, la Constitución promulgada en 2009 consagró la Jurisdicción Agroambiental con el fin de impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sean de competencia de autoridades administrativas.</p> <p>En Bolivia, el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales son responsables de impartir justicia especializada en materia agraria, forestal, pecuaria, ambiental, de aguas y biodiversidad, sobre la base de los principios de función social, integralidad (tratamiento integral de la tierra), inmediatez, sustentabilidad, e interculturalidad, comprometidos con la protección de los derechos de las bolivianas, los bolivianos y de la Madre Tierra, a través de la vigencia plena e irrestricta de la Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes.</p> <p>Los Tribunales y los jueces conocen de acciones reales agrarias, forestales y ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad. Además, se encargan del conocimiento de procesos que resulten de contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables.</p> <p>El proceso agrario en la ley boliviana se subdivide en procesos contencioso-administrativos (demanda contra decisiones administrativas de la autoridad agraria) y procesos agrarios (controversias entre privados). El proceso se evacúa con base en el principio de concentración: se realiza a partir de audiencias en donde las partes presentan sus alegatos, se surte la práctica de las pruebas y se dicta sentencia. Además, en caso de no existir una norma especial en la Ley 1715 que regule un tema, esta establece que deberá remitirse a la norma general en materia de procedimiento.</p>
<p>Por otro lado, es importante destacar que existe una apuesta importante por incrementar el número de conciliaciones previas a través del contacto directo con el juez.</p> <p>2.2.3 Costa Rica</p> <p>En 2012 se expidió la Ley de Jurisdicción Agraria, Agroalimentaria y Agroambiental (15.887). Esta, junto con la Ley orgánica del poder judicial y el Código Procesal Agrario, componen la Jurisdicción Agraria y Agroambiental, la cual busca “tutelar las situaciones y relaciones jurídicas que se susciten con respecto al desarrollo de las actividades de producción agraria y agroambiental de animales, vegetales u otros organismos. Además, de las actividades de transformación, industrialización, valorización y comercialización de productos agrícolas, su trazabilidad, así como las auxiliares a éstas, referidas a actos y contratos propios del ejercicio de la actividad agraria y el desarrollo rural.”</p> <p>La Jurisdicción Agraria, Agroalimentaria y Agroambiental se encarga de conocer de derechos reales y personales sobre bienes agrarios, destinados o aptos para el desarrollo de actividades y servicios agrarios o agroambientales, así como los vinculados a su tutela y aprovechamiento, así como sus procesos sucesorios; (ii) la posesión, deslinde, división, localización de derechos, derribo, suspensión de obra, titulación, rectificación de medida y entrega material de los mencionados bienes; (iii) los actos y contratos vinculados con la constitución o el ejercicio de actividades y servicios agrarios o agroambientales, entre otros; y (iv) los conflictos surgidos entre particulares por el aprovechamiento de bienes o servicios ambientales para actividades agrarias y agroambientales. Además, es competente sobre la prevención, restauración e indemnización de daños causados por actividades agrarias y agroambientales, así como aquellos que impacten tales actividades.</p> <p>La norma del 2012 crea una estructura jerárquica de jueces que se acomodan al esquema de justicia del país, pero además, de normas procesales que regulan de manera especial el procedimiento judicial que se debe seguir cuando surgen conflictos de competencia de la ley.</p> <p>Sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es importante resaltar que la Ley 15.887 permite que distintas formas puedan ser usadas respetando las tradicionales ancestrales de los pueblos tribales. Así, se propende por entender la cosmovisión de las diversas poblaciones que se encuentran involucradas, y permitir que estos grupos puedan dar por finalizadas sus diferencias en materia agraria y rural, a través de los mecanismos propios de sus pueblos. La mencionada ley, además, reenvía a las normas consuetudinarias de los pueblos ancestrales para resolver las controversias sin tener que acudir a la justicia.</p>	<p><b>3. Contenido</b></p> <p>Este proyecto de ley estatutaria tiene como propósito establecer el marco procesal para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles en suelo rural. Con el fin de lograr equilibrio entre la necesidad de especialización para atender y resolver los conflictos sobre el suelo rural y el diseño institucional existente en la Rama Judicial, el proyecto no crea una jurisdicción nueva, lo que demandaría una reforma constitucional y un andamiaje institucional enorme, sino una especialidad agraria en jurisdicción ordinaria y en la contencioso administrativa.</p> <p>La especialidad agraria que crea este proyecto de ley dispone principios para su funcionamiento que tienen como eje facilitar el acceso a la justicia de los habitantes de las zonas rurales, en particular, respecto a las mujeres; asimismo, reconoce la importancia de que las decisiones agrarias se armonicen con necesidades ambientales y con una adecuación de la oferta conforme al enfoque territorial. Para ello, además de los principios, prevé herramientas institucionales, como los jueces itinerantes y despachos con distintos servicios necesarios para la resolución de conflictos en la ruralidad, como conciliadores y expertos catastrales.</p> <p>En cuanto a la integración de la especialidad agraria, en lo ordinario se prevé que para lo municipal las competencias las desempeñen los jueces civiles municipales y los jueces promiscuos; adicionalmente, crea para el nivel de circuito los jueces agrarios y rurales y para los distritos judiciales las salas agrarias y rurales de los tribunales superiores. En el órgano de cierre, la Corte Suprema de Justicia, se reconoce que la Sala Civil tiene competencias agrarias, pero se enfatiza este rol con la inclusión de magistrados auxiliares con experticia en derecho agrario. Por su parte, en la jurisdicción contencioso administrativa, la especialidad estará formada por los jueces agrarios administrativos, las salas administrativas agrarias y rurales de los tribunales superiores de distrito judicial y en el Consejo de Estado una subsección en la sección primera será la encargada de los asuntos agrarios y rurales.</p> <p>Respecto a la competencia de la jurisdicción, el proyecto describe en el capítulo I del Título III las acciones relacionadas con predios y bienes inmuebles rurales, también las medidas judiciales en relación con los asuntos previstos en el Decreto Ley 902 de 2017. Asimismo, también prevé que se decidan asuntos de carácter ambiental cuando están relacionados con la pretensión ambiental. En este sentido es importante precisar que los asuntos ambientales causan controversias cada vez más frecuentes, sin embargo, su resolución amerita un diagnóstico de las necesidades particulares y un diseño institucional específico que pueda</p>

<p>responder a las mismas; por ello, no se incluyen en este proyecto controversias ambientales en sentido amplio.</p> <p>De manera específica en los capítulos II y III del Título III describe las competencias específicas en las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa; el IV se refiere a la resolución de conflictos de competencia; el V y el VI se refieren al proceso agrario y rural en la especialidad ordinaria y en la contencioso administrativa. Los siguientes regulan las notificaciones, los recursos y la cláusula expresa de remisión a otras normas para aspectos no regulados.</p> <p>El Título IV incluye un aspecto fundamental en la resolución de conflictos en la ruralidad: los métodos no jurisdiccionales. Estos mecanismos permiten desescalar los conflictos y racionalizar el uso de las vías judiciales. Este elemento cumple con los compromisos del Acuerdo Final que indican la necesidad de fortalecer e implementar este tipo de métodos para resolver la conflictividad social. Al respecto indica el Acuerdo:</p> <p>“[el gobierno nacional] creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos.” (pgs. 17-18)</p> <p>Por último, el proyecto prevé un régimen de transición que busca priorizar la implementación en las zonas con mayores necesidades de fortalecimiento institucional, con el fin de garantizar el acceso a la justicia. Por ello, dispone que la primera fase de implementación se hará en los municipios PDET, de tal manera que pueda avanzarse de manera progresiva en la consolidación de la institucionalidad de la especialidad y, de paso, proveer mejores condiciones para que los ciudadanos de esos municipios pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICULADO PROPUESTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA N° _____ “POR LA CUAL SE CREA UNA ESPECIALIDAD JUDICIAL AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECEN LOS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS AGRARIOS Y RURALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EL CONGRESO DE COLOMBIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DECRETA:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSICIONES GENERALES</b></p> <p><b>Artículo 1. Objeto.</b> Regular el marco procesal que rige las actuaciones judiciales y mecanismos alternativos para la resolución de los litigios y controversias respecto de los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural, las relaciones económicas de índole agraria particularmente descritas en esta Ley y la legislación agraria vigente.</p> <p><b>Artículo 2. Ámbito de aplicación.</b> La especialidad agraria y rural de la jurisdicción ordinaria y la especialidad agraria y rural de la jurisdicción contenciosa administrativa tendrán cobertura y capacidad en todo el territorio nacional.</p> <p><b>Artículo 3. Principios.</b> En la aplicación e interpretación de las disposiciones de esta ley deberán observarse de manera prevalente los principios constitucionales, así como los del derecho procesal general, con el objeto de garantizar la efectividad de los derechos. De igual forma, se tendrán en cuenta los siguientes principios especiales, que deberán tener estricta observancia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Accesibilidad.</b> Los despachos judiciales rurales y agrarios deberán ser objeto de la implementación de un Modelo de Gestión por parte del Consejo Superior de la Judicatura que se compadezca con la realidad de las áreas rurales y rurales dispersas, favoreciendo horarios de atención al público que se armonicen con el giro ordinario de la actividad rural en las cabeceras municipales, deberán contar con un conciliador en derecho adjunto al despacho y un facilitador que provea información a los ciudadanos con miras a superar las barreras de acceso a la administración de justicia. Para las zonas rurales indígenas, el conciliador y el facilitador deberán dominar la lengua originaria de la región en la cual ejercerá sus funciones. Deberán generarse formatos de fácil entendimiento para la población rural con miras a acceder a la oferta judicial de manera más simple y con el mínimo de formalidades necesarias para presentar ante el juez los derechos objeto de reclamo o defensa.</li> <li><b>2. Buena fe procesal.</b> Es deber de las partes y demás intervinientes en el proceso agrario y rural, proceder con lealtad, probidad y buena fe en todos sus actos dentro del proceso judicial.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>3. Celeridad y economía procesal.</b> Las actuaciones judiciales se deben adelantar con austeridad y eficiencia, evitando la dilación de los procedimientos, las decisiones inocuas y la interposición de recursos innecesarios. Se dotará a las autoridades judiciales de poderes correctivos para evitar maniobras o prácticas dilatorias que atenten contra la celeridad de los procesos.</li> <li><b>4. Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra.</b> Se garantizará la propiedad privada y los demás derechos adquiridos conforme a derecho. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.</li> </ol> <p>En aplicación de este principio en ningún caso se podrán afectar, vulnerar o desconocer los derechos adquiridos conforme a derecho por las decisiones que se profieran en aplicación de esta ley.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>5. Desarrollo integral del campo.</b> El desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes –agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de derecho, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.</li> <li><b>6. Eficacia.</b> Atendiendo a la finalidad de esta ley, se debe garantizar la materialización de los mandatos dispuestos en los procedimientos judiciales, que diriman controversias en materia agraria y rural, así como la seguridad en el disfrute de los derechos reconocidos a los ciudadanos en las decisiones judiciales.</li> <li><b>7. Especialidad agraria y rural.</b> En la resolución de las controversias y litigios a los cuales hace referencia esta ley los operadores judiciales de las especialidades agrarias y rurales de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberán tener en cuenta las particularidades de las relaciones agrarias y rurales asociadas a litigios sobre fundos rurales, a actos administrativos emanados por parte de la Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces.</li> </ol> <p>Las competencias de conocimiento de esta especialidad serán objeto de revisión por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho cada cuatro (4) años con miras a establecer nuevos tipos de litigiosidad que ameriten ser conocidas por estos despachos judiciales en cuyo caso, de ser necesario, se tramitará el respectivo proyecto de ley.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>8. Igualdad, equidad de género y protección reforzada.</b> En las actuaciones judiciales las autoridades promoverán la participación especial de las mujeres rurales y demás sujetos</li> </ol>	<p>de especial protección constitucional en condición de vulnerabilidad, con el fin de contribuir a la transformación estructural de la realidad rural colombiana. Las autoridades judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para generar condiciones que permitan la defensa efectiva de sus propios intereses a la parte afectada por condiciones de vulnerabilidad, a efecto de garantizar la igualdad y procesos justos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>9. Mujeres rurales.</b> Las mujeres rurales, en los términos del artículo 2 de la Ley 731 de 2002, son todas aquellas que sin distinción de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada, como es el caso de la economía del cuidado, relacionada con el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar. Del mismo modo, se reconocen como agentes esenciales del desarrollo rural sostenible. El reconocimiento de sus derechos se hará teniendo en cuenta sus condiciones especiales, con independencia de la estructura de familia que conformen.</li> </ol> <p>La Especialidad Judicial Agraria contemplará mecanismos que garanticen el acceso ágil, gratuito y oportuno a la justicia por parte de las mujeres rurales, de igual forma dispondrá de asesoría legal y formación especial para que las mujeres superen las barreras que dificultan la asignación, reconocimiento y la protección de sus derechos sobre la tierra. Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la resolución de conflictos sobre uso, control y tenencia de la tierra.</p> <p>En el proceso del que trata esta ley y a solicitud de la mujer rural, las organizaciones o asociaciones de mujeres podrán ejercer asesoría y acompañamiento. En el caso de ejercer representación legal, las organizaciones y asociaciones deberán contar con poder debidamente otorgado, en los términos del artículo 51 de esta Ley.</p> <p>Los estudiantes pertenecientes a los consultorios jurídicos de las facultades de derecho de las universidades oficialmente reconocidas por el Estado apoyarán la representación de mujeres rurales en los asuntos previstos en esta ley y bajo la supervisión directa en cada actuación del personal académico que designe la respectiva universidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>10. Oficiosidad:</b> Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural lo anterior sin perjuicio de las cargas procesales que por ley le correspondan a las partes e intervinientes.</li> <li><b>11. Publicidad y nuevas tecnologías:</b> Las autoridades judiciales deberán promover mecanismos de publicidad eficaces, que faciliten la participación comunitaria, garanticen el conocimiento oportuno del inicio, desarrollo y terminación del proceso, de las instancias en que se puede participar, de los recursos judiciales a disposición, de la posibilidad de presentar pruebas, así como de las decisiones y la posibilidad efectiva de contradicción y ejercicio de los derechos. Para tal fin se promoverá el uso de las nuevas</li> </ol>



<p>tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>En todo caso, las comunicaciones y notificaciones se harán por escrito, por medio electrónico o por cualquier medio idóneo para garantizar el acceso efectivo a la información y a la justicia en todas las zonas del territorio nacional, y el funcionario deberá dejar constancia o registro de ellas en el despacho.</p> <p>Así mismo, se deberán establecer los mecanismos de consulta ágil y oportuna de la información generada por las diferentes entidades públicas, por parte del juez. En la planificación e implementación de esta estrategia de información se deberán incluir los mecanismos ya existentes.</p> <p><b>12. Uso prevalente y necesario de mecanismos alternativos de solución de conflictos y participación comunitaria rural:</b> Las autoridades responsables velarán por el uso prevalente de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para éste propósito el despacho del juez agrario y rural contará con un conciliador en derecho adjunto al Despacho, adicionalmente, la jurisdicción priorizará el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos en diferendos propios de la tenencia y uso de la tierra que sean objeto de conciliación, para lo cual también apoyará la suscripción de acuerdos de conciliación en casos de diferencias de colindancias. Al adelantar estos procedimientos se tendrá en cuenta el derecho propio de los pueblos y comunidades.</p> <p>El acta de conciliación prestará mérito ejecutivo de las obligaciones de dar o hacer que sean contraídas con ocasión del acuerdo y hará tránsito a cosa juzgada para lo cual deberá ser susceptible de inscripción en el registro público inmobiliario siempre que medie la voluntad libre de quienes suscriban. El registro de las actas de conciliación que versen sobre derechos de inmuebles rurales no tendrá costo alguno en la oficina de registro de instrumentos públicos, siempre que las partes hayan invocado el amparo de pobreza en el marco del proceso o que el conciliador de fe de su condición de vulnerabilidad.</p> <p><b>13. Colaboración armónica.</b> Las entidades del Estado y demás autoridades nacionales y territoriales están obligadas a prestar su colaboración y apoyo para la efectiva administración de la justicia especial agraria en el país, por lo cual deberán trabajar de manera armónica y articulada para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley.</p> <p><b>14. Gratuidad.</b> Se garantizará la gratuidad, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010, cuando se trate de personas de escasos recursos, en los términos del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.</p> <p><b>15. Defensa Pública.</b> La Defensoría del Pueblo a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá la representación judicial técnica en la especialidad agraria y rural a las personas que previa verificación, se les haya declarado el amparo de pobreza. El Estado dispondrá la partida presupuestal necesaria para que se garantice una adecuada cobertura</p>	<p>en todo el territorio nacional.</p> <p><b>16. Desarrollo Sostenible.</b> Es aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Los jueces en sus decisiones tendrán en cuenta la conservación y el buen manejo del suelo rural fértil que, en todo caso, es responsabilidad de sus propietarios o legítimos poseedores, para el desarrollo social, económico y ambiental equilibrado.</p> <p><b>17. Función Ecológica de la Propiedad.</b> Limitación a la que se encuentra sujeta el derecho a la propiedad que se encuentra estrictamente ligada con el concepto de desarrollo sostenible.</p> <p><b>18. Igualdad de las Partes.</b> Las autoridades judiciales que se rijan con esta Ley harán uso de los poderes que ésta les otorgue para lograr la igualdad real entre las partes.</p> <p><b>19. Enfoque Territorial.</b> Supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurando implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. Se brindará especial atención a las comunidades rurales que actualmente están dentro o colindan con el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), reservas forestales, ecosistemas estratégicos y demás categorías de protección que señale la legislación nacional e internacional.</p> <p><b>20. Protección de los Recursos Hídricos.</b> La resolución a los conflictos que se someten a esta jurisdicción deberán integrar el respeto por el manejo, utilización y conservación de los recursos hídricos como fuente de toda la actividad agraria y como esencia de la existencia de la vida.</p> <p><b>Artículo 4.</b> Adiciónense los siguientes incisos al artículo 2º de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 2. Acceso a la justicia. El Estado garantiza el acceso de todas las personas a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y será fortalecido el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo una oficina de la Defensoría del Pueblo compuesta por al menos un Defensor Municipal y un Defensor Público, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Defensor del Pueblo.</p> <p>Deberá garantizarse el acceso a la justicia a todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, procurando la permanente actualización de los recursos disponibles y la formación adecuada de los servidores</p>
<p>públicos y de las personas para garantizar el acceso a la justicia.</p> <p>Las personas que demanden la tutela de sus derechos e intereses podrán hacerlo a través de los medios tecnológicos y digitales que para el efecto se establezcan.</p> <p>Los municipios, la defensoría del pueblo, las personerías y demás entidades públicas, deberán disponer en sus sedes de los medios para que las personas del sistema de justicia puedan acceder para adelantar actuaciones judiciales de manera virtual.</p> <p>La oferta de justicia en cada municipio contará con una planeación adecuada y participativa, atendiendo a las características particulares de conflictividad social, características sociodemográficas, demanda de justicia existente y potencial, y condiciones para la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para el efecto se fortalecerán la defensoría del pueblo, las personerías municipales, y casas de justicia con el fin de garantizar el acceso gratuito a este servicio público.</p> <p>El Estado garantizará el acceso a la justicia en las zonas rurales y promoverá la creación de mecanismos judiciales y administrativos que atiendan a las particularidades de estos territorios, así como mecanismos alternativos de solución de conflictos, para resolver los conflictos individuales y comunitarios que se presenten en dichas zonas, procurando el uso de las tecnologías de la información. Así mismo, deberá tener en cuenta los mecanismos alternativos de solución de conflictos propios de las comunidades étnicas asentadas en dicha zonas rurales de acuerdo a la realidad social y económica de cada región.</p> <p>El Estado también promoverá la articulación entre las distintas formas de oferta de justicia y facilitará el acceso coordinado a las mismas por parte de las personas.</p> <p>Las autoridades competentes adecuarán la infraestructura física para la prestación del servicio de justicia y ajustarán sus procedimientos e instrumentos de gestión, para garantizar la adecuada y oportuna atención a la población en situación de discapacidad. El Ministerio de Justicia celebrará convenios con la Rama Judicial para sumar esfuerzos presupuestales que prioricen la construcción de casas de justicia en los municipios PDET.</p> <p>Con el propósito de contar con información que facilite la adopción de medidas para el fortalecimiento del acceso a la justicia, el Estado diseñará e implementará instrumentos para la medición periódica de la situación de acceso a la justicia y satisfacción de necesidades jurídicas en los diferentes territorios del país.</p> <p><b>PARÁGRAFO.</b> En cada municipio funcionará al menos un juzgado cualquiera que sea su categoría. Para lo cual en los términos del artículo 63 de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear despachos judiciales, jueces y</p>	<p>magistrados de apoyo itinerantes. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y resolver los procesos dentro de los despachos que se señalen expresamente, de acuerdo a la demanda de justicia.</p> <p>Progresivamente, de conformidad con la situación fiscal de la Nación y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector justicia, el Estado deberá garantizar el estándar internacional de jueces por número de habitantes determinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).</p> <p><b>Artículo 5.</b> Modifíquese el artículo 6 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 6. Gratuidad. La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas procesales, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley.</p> <p>No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, agrarios y rurales, que sean de naturaleza ordinaria o contenciosa administrativa, ni en las acciones públicas de constitucionalidad o los derivados del ejercicio de acciones de tutela, populares, de cumplimiento, habeas corpus y habeas data.</p> <p>Tampoco podrá cobrarse aranceles a las personas de escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determine la ley.</p> <p>El arancel judicial constituirá un ingreso público a favor de la Rama Judicial.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMERO.</b> El legislador podrá establecer mecanismos que permitan a las entidades públicas contribuir a la financiación de la Rama Judicial.</p> <p><b>Artículo 6.</b> El artículo 8º de la Ley 270 de 1996 quedará así:</p> <p>Artículo 8. Mecanismos alternativos. La Ley podrá establecer mecanismos alternativos al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios. Excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales a ciertas y determinadas autoridades administrativas para que conozcan de asuntos que por su naturaleza o cuantía puedan ser resueltos por aquellas de manera adecuada y eficaz. En tal caso la ley señalará las competencias, las garantías al debido proceso y las demás condiciones necesarias para proteger en forma apropiada los derechos de las partes.</p> <p>Los particulares podrán ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores, amigables componedores, o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir decisiones en derecho o en equidad.</p>

<p>El Estado promoverá por conducto de las autoridades judiciales y administrativas, el acceso a los mecanismos alternativos, a los mecanismos administrativos y a aquellos donde los particulares administren justicia transitoriamente en las zonas urbanas y rurales atendiendo las características de la conflictividad existente y/o potencial, así como la caracterización sociodemográfica y la presencia institucional y de actores que participen en la administración de justicia en cada territorio.</p> <p>El Ministerio de Justicia y del Derecho realizará el seguimiento y evaluación de las medidas que se adopten en desarrollo de lo dispuesto por este artículo y cada dos (2) años rendirá informe al Congreso de la República con las recomendaciones pertinentes.</p> <p>Las entidades públicas y privadas que gestionen los mecanismos alternativos de solución de conflictos deberán suministrar periódicamente al Ministerio de Justicia y del Derecho, informes sobre su gestión, donde se detalle la información acerca del número, tipología y resultados de los asuntos atendidos.</p> <p><b>Artículo 7. Amparo de pobreza.</b> En los procesos agrarios y rurales se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y de las personas a quienes por ley debe alimentos, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado.</p> <p>Cuando se deniegue el amparo solicitado, no habrá lugar a la imposición de multa, salvo en los casos en que se demuestre temeridad, mala fe o colusión.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de la oportunidad procesal, competencia, requisitos, trámite, efectos y demás disposiciones, se atenderá, a lo estipulado en el Código General del Proceso.</p> <p><b>Artículo 8. Fuentes e Interpretación de las Normas Procesales.</b> Los jueces y magistrados aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de esta justicia especial agraria y rural consiste en conseguir la plena realización de la justicia en el área rural, en consonancia con los fines y principios constitucionales y los especiales del derecho agrario. También observarán en la aplicación legal, las disposiciones ambientales.</p> <p>Los jueces y magistrados interpretarán y aplicarán las disposiciones procesales en armonía con los principios que inspiran esta ley, la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y, en cuanto no se opongan a ellos, con los principios que orientan el sistema procesal colombiano.</p> <p>La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, siempre y cuando no contravengan el objeto y los principios de la presente ley. No obstante lo anterior, se deberá cumplir con el precedente</p>	<p>judicial según la definición dada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.</p> <p><b>Artículo 9. Decisiones extra y ultra petita.</b> En los procesos a los que se refiere la presente Ley los jueces aplicarán lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.</p> <p><b>Artículo 10. Participación del Ministerio Público.</b> El Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, intervendrá de oficio o a solicitud de parte en cualquier etapa del proceso agrario y rural. Su intervención se realizará a través de los funcionarios o agentes competentes de acuerdo con las funciones y competencias de la entidad. Para el efecto, le será notificada la providencia que dé inicio al proceso.</p> <p>Igualmente, la Procuraduría General de la Nación puede conceptuar respecto del objeto del litigio en cualquier etapa procesal siendo obligatorio para el juez pronunciarse sobre dicho concepto.</p> <p><b>Artículo 11. Itinerancia.</b> Cuando se estime necesario y pertinente, conforme a las características del caso objeto de la actuación correspondiente, los despachos judiciales rurales y agrarios podrán ejercer sus funciones y competencias de manera itinerante en todo el territorio nacional, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta aspectos como la mayor demanda de justicia, la necesidad de una mayor frecuencia o permanencia de los despachos judiciales rurales y agrarios, de la colindancia de corregimientos y la complejidad de los asuntos a decidir y lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.</p> <p><b>Artículo 12. Itinerancia en zonas focalizadas.</b> Los jueces agrarios y rurales de la jurisdicción ordinaria y los jueces agrarios y rurales administrativos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con base en la competencia que les asigna la presente ley se desplazarán a los municipios definidos en el Decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los programas de desarrollo con enfoque territorial -PDET-, y a los municipios de mayor conflictividad rural y agraria en el país, sin perjuicio de la ampliación progresiva de la cobertura en todo el territorio, y que se les hubiere asignado por el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de adelantar los asuntos de su competencia.</p> <p>También se priorizará la población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, con especial atención en los derechos de las víctimas del conflicto, de los niños y niñas, de las mujeres, personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.</p> <p><b>Artículo 13. Poderes y deberes del juez.</b> Sin perjuicio de los demás poderes y deberes que la ley les confiere, para garantizar el cumplimiento del objeto, la finalidad y los principios del presente proceso, el juez tendrá los siguientes poderes especiales:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Acceder en forma permanente, ágil y oportuna a los registros y bases de datos necesarias, con el fin de verificar la situación del inmueble objeto del proceso o para suplir cualquier deficiencia de la demanda, sus anexos o requisitos.</li> <li>Propender por el uso privilegiado de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.</li> <li>Desechar actuaciones y diligencias inútiles y rechazar solicitudes, incidentes y pruebas improcedentes o inconducentes, recursos que no estén legalmente autorizados y todo medio de carácter dilatorio.</li> <li>Precaver, cuando tome medidas en relación con un inmueble, los riesgos consiguientes de la suspensión de la explotación de este, con base en los conceptos técnicos o las pruebas aportadas previamente por la parte afectada.</li> <li>Decretar las medidas cautelares en los términos de esta ley.</li> <li>Verificar que el allanamiento a la demanda, su desistimiento o la transacción se hayan realizado de modo libre y sin vicios del consentimiento.</li> <li>Procurar que no se desvirtúen los principios a que se refiere esta ley, en especial lo atinentes a la igualdad real de las partes ante la justicia, la simplicidad, concentración y brevedad de las actuaciones, la aplicación de los enfoques diferenciales y, por ende, la celeridad de los procesos, cuya suspensión o retardo debe impedir, dándoles el impulso necesario, como también los relativos a la intermediación del juez y sana crítica en la apreciación de la prueba, todo ello sin menoscabo del principio fundamental del debido proceso.</li> <li>Priorizar la atención de la mujer rural en razón a la calidad de especial protección del sujeto, por lo cual deberá caracterizar el grupo familiar de las partes procesales.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO II</b> <b>INTEGRACIÓN DE LA ESPECIALIDAD AGRARIA</b></p> <p><b>Artículo 14. Integración de la Especialidad Agraria y Rural en la Jurisdicción Ordinaria.</b> La Jurisdicción Ordinaria, en su Especialidad Agraria y Rural, se integrará de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.</li> <li>Las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.</li> <li>Los juzgados agrarios y rurales del Circuito.</li> <li>Los juzgados civiles municipales, que también ejercerán competencias agrarias y rurales, y los juzgados promiscuos</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> Para la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, el Consejo Superior de la Judicatura deberá disponer lo necesario para que los magistrados que la integren cuenten con al menos un magistrado auxiliar con formación o experiencia en derecho agrario. Respecto a los demás, se promoverán medidas de formación en derecho agrario y rural por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla</p>	<p><b>Artículo 15. Integración de la Especialidad Agraria y Rural en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.</b> La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su Especialidad Agraria y Rural, se integrará de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.</li> <li>Las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Administrativos.</li> <li>Los Juzgados agrarios y rurales administrativos.</li> </ol> <p><b>Artículo 16.</b> Modifíquese el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 11. La Rama Judicial del Poder Público está constituida por:</p> <p>I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De la Jurisdicción Ordinaria:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Corte Suprema de Justicia.</li> <li>Tribunales Superiores de Distrito Judicial.</li> <li>Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, agrarios y rurales, de ejecución de penas y medidas de seguridad, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;</li> </ol> </li> <li>De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Consejo de Estado</li> <li>Tribunales Administrativos</li> <li>Juzgados Administrativos y agrarios y rurales administrativos.</li> </ol> </li> <li>De la Jurisdicción Constitucional:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Corte Constitucional.</li> </ol> </li> <li>De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz.</li> <li>De la Jurisdicción Disciplinaria:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Comisión Nacional de Disciplina Judicial</li> <li>Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial</li> </ol> </li> </ol> <p>II. La Fiscalía General de la Nación. III. El Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Parágrafo 1°. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores,</p>

<p>los Tribunales Administrativos y las comisiones seccionales de disciplina judicial y Consejos seccionales de la judicatura tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local.</p> <p>Los jueces especializados y los de descongestión tendrán la competencia territorial y material específica que les señale el acto de su creación.</p> <p>Parágrafo 2º. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.</p> <p>Parágrafo 3º. En las ciudades se podrán organizar los despachos judiciales en forma desconcentrada.</p> <p><b>Artículo 17.</b> Modifíquese el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones como máximo tribunal de la Justicia Ordinaria por medio de cinco (5) salas, integradas así: La Sala Plena, integrada por veintitrés (23) magistrados de las Salas de Casación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas de Casación; la Sala de Casación Civil Agraria y Rural, integrada por siete (7) Magistrados; la Sala de Casación Laboral, integrada por siete (7) Magistrados; la Sala de Casación Penal, integrada por nueve (9) Magistrados.</p> <p>Parágrafo: La Sala Especial de Primera Instancia estará integrada por tres (3) magistrados y la Sala Especial de Instrucción por seis (6) magistrados.</p> <p><b>Artículo 18.</b> Modifíquese el artículo 22 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 22. Régimen de los juzgados. Los Juzgados Civiles, Agrarios y Rurales, Penales, de Familia, Laborales, de Ejecución de Penas y medidas de seguridad, de Pequeñas Causas y demás juzgados especializados creados conforme a la ley, que determine el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de la administración de justicia en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción Ordinaria. Sus características, denominación y número serán los establecidos por dicha Corporación.</p> <p>Cuando el número de asuntos así lo justifique, los juzgados podrán ser promiscuos para el conocimiento de procesos civiles, agrarios y rurales, penales, laborales o de familia.</p> <p>De conformidad con las necesidades de cada ciudad y de cada municipio habrá jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple sobre asuntos de la Jurisdicción Ordinaria, definidos legalmente como conflictos menores. La localización</p>	<p>de sus sedes será descentralizada en aquellos sectores de ciudades y municipios donde así se justifique debido a la demanda de justicia. Su actuación será oral, sumaria y en lo posible de única audiencia.</p> <p>Para garantizar el acceso a la administración de justicia, el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear Juzgados itinerantes para solventar las necesidades de administración de justicia en algunas zonas del país, que presenten déficit de cobertura en la prestación del servicio de justicia, o en casos específicos y especiales en materia penal, en que se requiera una resolución pronta y cumplida de justicia.</p> <p>Su creación cumplirá los mismos términos definidos en el artículo 63 de esta Ley y su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta Ley y demás normas pertinentes.</p> <p><b>PARÁGRAFO.</b> En un término de dos (2) años el Consejo Superior de la Judicatura deberá evaluar el cumplimiento de los objetivos para la creación de los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples, y de manera motivada determinar su continuidad o su transformación en juzgados municipales.</p> <p>Parágrafo 2. En lo que refiere a la gestión administrativa de los despachos judiciales agrarios y rurales, podrán compartir logística con las entidades de la rama ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales que para ese propósito celebren un convenio interadministrativo.</p> <p><b>Artículo 19.</b> Modifíquese el artículo 36 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 36. De la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) Secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La Sección Primera, se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados y conocerá de los asuntos agrarios y rurales.</li> <li>La Sección Segunda se dividirá en dos (2) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.</li> <li>La Sección Tercera se dividirá en tres (3) Subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.</li> <li>La Sección Cuarta, por cuatro (4) magistrados,</li> <li>La Sección Quinta, por cuatro (4) magistrados.</li> </ol>
<p>Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la ley, el reglamento de la Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a cada Sección y a las respectivas Subsecciones.</p> <p>En la acción de pérdida de investidura de congresista se deberá garantizar la doble conformidad.</p> <p><b>Artículo 20.</b> Modifíquese el parágrafo del artículo 37 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los conflictos de competencia entre los Tribunales Administrativos, entre Secciones de distintos Tribunales Administrativos, entre los Tribunales y Jueces de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos, serán resueltos por las respectivas Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, de acuerdo con su especialidad. Los conflictos entre juzgados administrativos de un mismo circuito, o entre éstos y/o juzgados agrarios y rurales administrativos de un mismo circuito o entre secciones de un mismo Tribunal Administrativo serán decididos por el correspondiente Tribunal en pleno.</p> <p><b>Artículo 21.</b> Adiciónense los siguientes incisos al artículo 50 de la Ley 270 de 1996:</p> <p>En lo concerniente a la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Ordinaria y a la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la distribución de los Despachos Judiciales que hagan parte de las mismas deberá enmarcarse en la adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en los municipios definidos en el Decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los programas de desarrollo con enfoque territorial -PDET-, y en los municipios de mayor conflictividad rural y agraria en el país, sin perjuicio de la ampliación progresiva de la cobertura en todo el territorio nacional.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura creará los despachos judiciales que sean requeridos para el cumplimiento de la ley, atendiendo a la especialidad de la materia y a los criterios establecidos en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pudiendo basarse, entre otros, en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <p>Para garantizar el acceso a la administración de justicia, el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear Juzgados itinerantes para solventar las necesidades de administración de justicia en algunas zonas del país, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2 y 51 de esta ley.</p> <p>Los despachos judiciales agrarios y rurales administrativos, así como los jueces agrarios y rurales ordinarios podrán atender la competencia funcional de ambas especialidades con el propósito de garantizar la atención judicial a los ciudadanos rurales en el territorio nacional.</p>	<p>El Consejo Superior de la Judicatura en la creación de los despachos judiciales agrarios y rurales administrativos, incorporará profesionales y tecnólogos en áreas con énfasis en información geográfica, topográfica, cartográfica y catastral y demás similares. La asignación se realizará por distritos o circuitos según las necesidades.</p> <p><b>Artículo 22.</b> Modifíquese el artículo 51 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 51.</b> Organización básica de los despachos judiciales. La organización básica interna de cada despacho judicial será establecida por el Consejo Superior de la Judicatura, con sujeción a los siguientes parámetros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Las competencias asignadas por la Ley.</li> <li>El volumen promedio de los asuntos, la carga razonable y el nivel estimado de rendimiento.</li> <li>Las necesidades que existan en materia de asistencia y asesoría en distintas disciplinas.</li> <li>Los juzgados agrarios y rurales del circuito y los juzgados agrarios y rurales administrativos deberán contar con un conciliador en derecho adjunto al despacho y un facilitador que provea información a los ciudadanos con miras a superar las barreras de acceso a la administración de justicia.</li> <li>Las características particulares de la demanda de justicia existente y potencial conforme a la conflictividad social.</li> <li>Los requerimientos de empleados de acuerdo con la carga laboral de cada despacho judicial.</li> </ol> <p>Para estos efectos se considerarán los informes y estadísticas reportadas por los despachos judiciales, estudios sobre la conflictividad y litigiosidad en los territorios a impactar y los modelos de gestión determinados por el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Para el caso de la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Ordinaria y de la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, conforme lo disponga el Consejo Superior de la Judicatura y lo previsto en la ley, el Juzgado Agrario y Rural o el Juzgado Agrario Administrativo, según el caso, podrá contar con un número plural de jueces que integren el mismo despacho, en calidad de jueces adjuntos, asignándose a cada uno el reparto individual de los procesos para su conocimiento, sin que hubiere entre ellos relación de subordinación, con énfasis en los municipios definidos en el Decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los programas de desarrollo con enfoque territorial, sin perjuicio de la ampliación progresiva de la cobertura en todo el territorio nacional.</p> <p>En lo que refiere a la gestión administrativa de estos despachos, podrán compartir logística con las entidades de la rama ejecutiva de mayor presencia en áreas rurales</p>

que para ese propósito celebren un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la Judicatura.

**Artículo 23.** Modifíquese el artículo 91 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 91. Creación, fusión y supresión de despachos judiciales. La creación de Tribunales o de sus Salas y de los Juzgados, se debe realizar en función de áreas de geografía uniforme, los volúmenes demográficos rural y urbano, el crecimiento porcentual intercensal de las Entidades Territoriales, la demanda existente y/o potencial de justicia en las diferentes ramas del derecho, la atención de las dinámicas socioeconómicas de las regiones funcionales en aquellos territorios donde éstas se hubieren establecido, la articulación con autoridades administrativas y actores que participan en la solución de conflictos y la existencia de vías de comunicación y medios de transporte que garanticen a la población respectiva un fácil acceso al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de la implementación de esquemas de itinerancia en los despachos judiciales.

La fusión se hará conforme a las siguientes reglas:

1. Sólo podrán fusionarse Tribunales, Salas o Juzgados de una misma Jurisdicción.
2. Los despachos que se fusionen deben pertenecer a una misma categoría.
3. Pueden fusionarse tribunales, Salas y Juzgados de esta o de distinta especialidad.

De la facultad de supresión se hará uso cuando disminuya la demanda existente y potencial de justicia en una determinada especialidad o comprensión territorial.

La supresión de despachos judiciales implica la supresión de los cargos de los funcionarios y empleados vinculados a ellos.

**PARÁGRAFO.** Para la determinación sobre la creación, fusión y supresión de despachos judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura, además de los criterios previstos en esta Ley, tendrá en cuenta los diagnósticos, modelos y estrategias en materia de acceso a la justicia que se elaboren desde el Gobierno Nacional, los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, así como las acciones relacionadas con la materia, que se planteen en los escenarios interinstitucionales de coordinación a nivel territorial, conforme a lo establecido en el artículo 86 de esta Ley, y en todo caso, previo concepto favorable y vinculante de la Comisión Interinstitucional.

**Parágrafo 2.** Para el caso de los Juzgados Agrarios y Rurales que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine el Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, cuyas características, denominación y número serán establecidos por dicha Corporación, de conformidad con lo establecido en la ley, deberá asegurarse la adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en los municipios definidos en el Decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los programas de desarrollo con enfoque territorial -PDET-, y en los municipios de mayor conflictividad rural y agraria en el país, sin perjuicio de la ampliación progresiva de la cobertura en

todo el territorio nacional.

**Artículo 24.** Modifíquese el artículo 202 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

**Artículo 202.** Los despachos judiciales agrarios y rurales de la jurisdicción ordinaria y los despachos agrarios y rurales de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con todo su personal y sus recursos físicos, serán organizados por el Consejo Superior de la Judicatura, el cual dispondrá todo lo necesario para que la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Ordinaria y la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa entren en funcionamiento en su totalidad, en un término no mayor a treinta (30) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, con énfasis en los municipios definidos en el Decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los programas de desarrollo con enfoque territorial -PDET-, y en los municipios de mayor conflictividad rural y agraria en el país, sin perjuicio de la ampliación progresiva de la cobertura en todo el territorio nacional.

**Artículo 25.** Modifíquese el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

**Artículo 107.** Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta y tres (33) Magistrados.

Ejercerá sus funciones por medio de tres (3) salas, integradas así: la Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintinueve (29) Magistrados y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro (4) Magistrados restantes.

Igualmente, tendrá una Sala de Gobierno, conformada por el presidente y el vicepresidente del Consejo de Estado y por los Presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.

La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno.

**Parágrafo.** La Sección Primera del Consejo de Estado estará integrada por seis (6) consejeros y conocerá de los asuntos agrarios y rurales administrativos.

**Artículo 26.** Modifíquese el artículo 110 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

**Artículo 110.** Integración de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera:

- a) La Sección Primera, se integrará por dos (2) subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados y conocerá de los asuntos agrarios y rurales.
- b) La Sección Segunda se dividirá en dos (2) subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.
- c) La Sección Tercera se dividirá en tres (3) subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) magistrados.
- d) La Sección Cuarta, por cuatro (4) Magistrados, y La Sección Quinta, por cuatro (4) Magistrados.

Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la ley, el Reglamento de la Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento corresponda a cada sección y a las respectivas subsecciones.

**Parágrafo.** Es atribución del presidente del Consejo de Estado, resolver los conflictos de competencia entre las secciones de la Sala de lo Contencioso de la Corporación.

**Artículo 27.** Adiciónese un inciso al artículo 122 de la Ley 1437 de 2011, así:

Cada Tribunal Administrativo contará con una Sala agraria y rural que conocerá de asuntos de naturaleza agraria y rural, siempre que intervenga como parte una entidad pública o que el bien inmueble rural sea de naturaleza pública, de conformidad con el régimen establecido para el efecto.

**Artículo 28.** Modifíquese el artículo 124 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

**Artículo 124. Régimen.** Los juzgados administrativos y los juzgados agrarios y rurales administrativos que, de conformidad con las necesidades de la administración de justicia, establezca el Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sus características, denominación y número serán fijados por esa misma Corporación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

**TÍTULO II**

**PROCEDIMIENTO AGRARIO Y RURAL**

**CAPÍTULO I**

**Asuntos de conocimiento de la especialidad agraria y rural y distribución de competencias**

**Artículo 29. Naturaleza del proceso.** El proceso agrario y rural es un proceso declarativo que se regirá por las reglas especiales previstas en esta ley y en las normas agrarias de carácter especial.

**Parágrafo.** Lo previsto en este título se aplicará sin perjuicio del procedimiento dispuesto en la Ley 1561 de 2012.

**Artículo 30. De los asuntos que se tramitan a través del proceso agrario y rural.** Se tramitarán a través del proceso agrario y rural dispuesto en esta ley los litigios y controversias respecto de los derechos de propiedad, uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural, así como los derivados de las relaciones económicas de índole agraria, en particular los siguientes asuntos:

1. Las acciones contra los actos administrativos proferidos por la Agencia Nacional de Tierras, respecto de los asuntos señalados en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 o en el trámite de la Ley 160 de 1994.
2. El medio de control de nulidad para la resolución de controversias respecto de los actos de adjudicación en los términos del artículo 38 del Decreto Ley 902 de 2017.
3. Las demandas presentadas por la Agencia Nacional de Tierras en desarrollo del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad rural de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 902 de 2017.
4. Las operaciones administrativas derivadas de la ejecución de actos administrativos proferidos en el procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad rural o en el trámite de la Ley 160 de 1994.
5. La expropiación de la que trata la Ley 388 de 1997, cuando verse sobre predios rurales y agrarios.
6. Las demandas de pertenencia sobre inmuebles rurales.
7. Las demandas de posesorios sobre inmuebles rurales.
8. Las demandas de saneamiento de la propiedad agraria.
9. Las demandas de formalización de la pequeña propiedad rural.
10. Las demandas de servidumbre que versen sobre inmuebles rurales.
11. Las demandas de división de la propiedad común de inmuebles rurales.
12. Las demandas de deslinde y amojonamiento de inmuebles rurales.
13. Las demandas reivindicatorias de inmuebles rurales.
14. Restablecimiento de la posesión o de la tenencia de inmuebles rurales.
15. Lanzamiento por ocupación de hecho si el bien ocupado es de naturaleza rural.
16. Controversias derivadas de contratos de índole agraria, como los de arrendamiento, aparcería, compraventa de tierras, enajenación de productos agropecuarios o similares, así



<p>como de actividades agrarias de transformación, producción o enajenación, en cuanto estos tres últimos no constituyan actos mercantiles ni tengan origen en relaciones de trabajo.</p> <p>17. Las demandas que versen sobre rectificación de áreas y linderos de inmuebles rurales cuando deban surtirse ante la jurisdicción.</p> <p>18. Las demandas sobre tradición imperfecta, ausencia o inexistencia de registro o folio de matrícula inmobiliaria y vicios en el registro de inmuebles rurales.</p> <p>19. Acciones de grupo y reparación directa, siempre que la controversia sea de carácter agrario y rural.</p> <p>20. Controversias sobre la administración de la copropiedad, reconocimiento y divisiones materiales de fundos rurales.</p> <p>21. Diferendos relacionados con el ambiente previstos en el Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, exclusivamente si se generan en el marco de procesos agrarios, y siempre que la pretensión ambiental impacte de manera directa la agraria y su definición sea necesaria para resolver el diferendo en materia agraria y rural.</p> <p>22. Nulidad de los actos administrativos emanados de la Agencia Nacional de Tierras o quien haga sus veces, siempre que dichos actos administrativos creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas asociadas a fundos rurales.</p> <p>23. Procesos de extinción del derecho de dominio que aborden diferendos asociados al cumplimiento de las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y de las normas de preservación y restauración del ambiente.</p> <p>24. Procesos de extinción del derecho de dominio donde se discuta lo establecido en el inciso tercero del artículo 58 de la Ley 160 de 1994 en cuanto a que no constituye explotación económica la simple tala de árboles, con excepción de las explotaciones forestales adelantadas de conformidad con lo dispuesto en la normativa ambiental y agropecuaria.</p> <p>25. Procesos de extinción del derecho de dominio que se adelanten por violación de las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente contenidas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y demás disposiciones pertinentes, entendiendo que hay deterioro o perjuicio sobre los recursos naturales renovables y del ambiente, cuando se realizan conductas o se producen abstenciones que los destruyen, agotan, contaminan, disminuyen, degradan, o cuando se utilizan por encima de los límites permitidos por normas vigentes, alterando sus calidades físicas, químicas o biológicas naturales, o se perturba el derecho de ulterior aprovechamiento en cuanto este convenga al interés público.</p> <p>26. Litigios relacionados con la adjudicación de bienes baldíos de la Nación por falta de correspondencia de la explotación acreditada con la aptitud específica del predio adjudicado, por la inexistencia o incumplimiento en la adopción o ejecución del plan gradual de reconversión, o por la omisión de obtener concepto previo favorable de la autoridad correspondiente del Sistema Nacional Ambiental, o por incumplimiento de la normatividad ambiental o de la función ecológica de la propiedad.</p>	<p>27. Diferencias relacionadas con la aplicación del artículo 69 de la Ley 160 de 1994 o norma que le sustituya en referencia al deber del solicitante de la adjudicación de baldíos de cumplir con los requisitos relacionados con la aptitud del predio, no acumulación o transferencia de ocupaciones, conservación de zonas ambientales protegidas, las relacionadas con la regulación de usos de baldíos inadjudicables como islas, playones y madrevejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional, y las zonas especiales en las cuales no se adelantarán programas de adquisición de tierras, y los demás requisitos de ley.</p> <p>28. Controversias relacionadas con la aplicación del artículo 75 de la Ley 160 de 1994 relativo a la constitución o sustracción de reservas sobre los terrenos baldíos en favor de entidades de derecho público para la ejecución de proyectos de alto interés nacional o a favor de entidades privadas sin ánimo de lucro, cuando el objeto de la zona de reserva especial consista en proteger o colaborar en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables o se relacione con fines ambientales establecidos por el legislador.</p> <p>29. Diferendos que se susciten en las Zonas de Reserva Campesina relacionados con el uso de la tierra por violación de las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente contenidas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y demás disposiciones pertinentes.</p> <p>30. Controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras sobre zonas de reserva forestal declaradas por la Ley 2 de 1959 o sobre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.</p> <p>31. Diferendos por el uso, ocupación o tenencia de tierras en páramos o áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o por la ejecución de los programas especiales de dotación de tierras establecidos en el Decreto 1277 de 2013 a favor de propietarios u ocupantes de zonas que deban someterse a un manejo especial o que sean de interés ecológico y que deban ser reubicados.</p> <p>32. Resolver la nulidad de los actos privados de transferencia de dominio o uso de predios inicialmente adjudicados como baldíos que excedan los límites máximos permitidos por la unidad agrícola familiar, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 72 inciso 8 de la Ley 160 de 1994.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conocerá de los asuntos descritos en el presente artículo en tanto correspondan a controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, en los que estén involucradas las entidades públicas, bienes públicos o los particulares cuando ejerzan función administrativa. De la misma forma, conocerá de todos los asuntos que promueva la Agencia Nacional de Tierras, en desarrollo del procedimiento de ordenamiento social de la propiedad rural. En los demás casos conocerá la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Ordinaria.</p>
<p>Se excluyen del proceso agrario y rural dispuesto en esta ley la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente de que tratan los artículos 3 y 75 de la Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones".</p> <p><b>Artículo 31. Acción agraria.</b> A través de la acción agraria, que constituye la regla general de inicio del proceso agrario y rural, toda persona puede solicitar al juez la solución de un conflicto respecto de los asuntos previstos en el artículo 30, en el marco del objeto y del procedimiento contemplados en la presente ley.</p> <p><b>Artículo 32.</b> Adiciónese el artículo 138A a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 138A. Nulidad agraria y restablecimiento del derecho.</b> Los particulares que fueron parte del Procedimiento Único del que trata el Decreto Ley 902 de 2017 podrán demandar la nulidad de los actos administrativos definitivos expedidos con ocasión de este, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su ejecutoria.</p> <p>La misma acción ejercerán los particulares que aduzcan tener derechos reales sobre los predios relacionados con la formalización de predios privados, clarificación de la propiedad, deslinde, adjudicación, revocatoria directa y recuperación de baldíos, extinción del dominio sobre tierras incultas y expropiación de predios rurales, de que trata la Ley 160 de 1994, y siempre que no hubieren comparecido al procedimiento único, caso en el cual el término para interponer la acción será de tres (3) años contados a partir de la fecha de inscripción del acto administrativo en el folio de matrícula inmobiliaria.</p> <p>El medio de control podrá ejercerse directamente, sin necesidad de haber interpuesto los recursos pertinentes contra el acto administrativo.</p> <p>En cuanto al término de la caducidad de los demás medios de control que se tramiten a través del proceso agrario y rural se atenderá lo dispuesto en el artículo 164 del presente Código.</p> <p><b>Artículo 33. Acción de resolución de controversias suscitadas por varios actos de adjudicación.</b> Cuando sobre un mismo predio existan varias adjudicaciones realizadas por parte de las Gobernaciones, Ministerio de Agricultura, INCORA, INCODER o la Agencia Nacional de Tierras, esta última podrá de oficio o a solicitud de parte demandar la resolución de las controversias para que se determine y declare quién tiene mejor derecho al predio y merece conservar la propiedad, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las fechas de las adjudicaciones;</li> <li>2. La verificación de que los beneficiarios hayan cumplido con los requisitos establecidos en el régimen vigente para la adjudicación;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Las fechas de inscripciones en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, siguiendo el principio de prioridad o rango establecido en el literal c) del artículo 3° de la Ley 1579 de 2012;</li> <li>4. Las mejoras implantadas en el terreno y quién las implantó;</li> <li>5. Quien ejerce posesión material de los predios, considerando los términos y requisitos de la prescripción adquisitiva del dominio.</li> </ol> <p>La sentencia deberá pronunciarse sobre la propiedad de las mejoras y deberá ordenar en caso de que pertenezcan a una persona diferente a quien conservará la propiedad, su reconocimiento, así como sobre los demás derechos reales que estuvieran constituidos sobre los folios de matrícula inmobiliaria que identifican el bien.</p> <p>Resueltas las controversias sobre los actos de adjudicación, de ser el caso, el juez ordenará la recuperación material inmediata del bien inmueble, y tomará las medidas que se estimen necesarias para garantizar que las partes vencidas entreguen el inmueble.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en los asuntos agrarios y rurales</b></p> <p><b>Artículo 34.</b> Modifíquese el numeral 3° del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dictar auto o sentencia de unificación en los asuntos indicados en el artículo 271 de este código. En ningún caso, la Sala Plena podrá conocer de los asuntos de naturaleza agraria y rural que conozca la Sección Primera del Consejo de Estado. Cuando se trate de un asunto agrario y rural la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también podrá solicitar que sea de conocimiento del Consejo de Estado.</li> </ol> <p><b>Artículo 35.</b> Adiciónese el parágrafo 2° al artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p><b>Parágrafo 2°.</b> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos rurales y agrarios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De la revisión eventual de las providencias que pongan fin al proceso dictadas por las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Administrativos.</li> <li>2. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación de carácter agrario y rural tramitados por las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Administrativos y los Jueces Agrarios y Rurales Administrativos.</li> <li>3. De los recursos extraordinarios de revisión referidos en la Ley 160 de 1994.</li> </ol>

<p>En relación con los asuntos rurales y agrarios que sean de conocimiento del Consejo de Estado en única o segunda instancia, cualquiera sea el medio de control o acción promovida, corresponderá a la Sección Primera Subsección B del Consejo de Estado la tramitación de estas materias. De igual forma se procederá, cuando el objeto del laudo corresponda a temas agrarios y rurales de conformidad con el régimen establecido para dicha materia.</p> <p><b>Artículo 36.</b> Adiciónese el numeral 27 al artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>27. De los de nulidad contra los actos de la Agencia Nacional de Tierras, en los casos previstos en la Ley.</p> <p><b>Artículo 37.</b> Adiciónese el numeral 9 y un párrafo al artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>9. De la aprobación de los acuerdos de conciliación sobre asuntos agrarios y rurales de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuyas pretensiones patrimoniales excedan el equivalente a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En relación con el asunto previsto en el numeral 9 de este artículo, corresponderá a las Salas agrarias y rurales de los Tribunales Administrativos la tramitación de estas materias.</p> <p><b>Artículo 38.</b> Adiciónese un párrafo al artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Parágrafo. Cuando se trate de asuntos de índole agrario y rural, cualquiera sea el medio de control o acción promovida, de conformidad con el régimen establecido para el efecto, corresponderá a las Salas agrarias y rurales de los Tribunales Administrativos la tramitación de estas materias.</p> <p><b>Artículo 39.</b> Modifíquese el artículo 154 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 154. Competencia de los jueces administrativos en única instancia.</b> Los jueces administrativos conocerán en única instancia:</p> <p>1. Del recurso de insistencia previsto en la parte primera de este código, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital.</p>	<p>2. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en única instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</p> <p>3. De la aprobación de los acuerdos de conciliación sobre asuntos agrarios y rurales de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuyas pretensiones patrimoniales no excedan el equivalente a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes, vigentes, y de aquellos que no tengan cuantía.</p> <p>4. De la acción de nulidad agraria y restablecimiento del derecho contra los actos expedidos por la autoridad administrativa sobre asuntos agrarios y rurales cuyas pretensiones patrimoniales no excedan el equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De los asuntos contenciosos agrarios y rurales de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cualquiera sea el medio de control o acción promovida, cuyas pretensiones patrimoniales no excedan el equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>Parágrafo. En relación con los asuntos previstos en los numerales 3 y 4 de este artículo, corresponderá a los juzgados agrarios y rurales administrativos la tramitación de estas materias a través del proceso especial agrario y rural.</p> <p><b>Artículo 40.</b> Modifíquese el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia.</b> Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra actos administrativos expedidos por funcionarios u organismos del orden distrital y municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. Se exceptúan los de nulidad contra los actos administrativos relativos a impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con estos asuntos, cuya competencia está asignada a los tribunales administrativos.</p> <p>2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, sin atención a su cuantía.</p> <p>3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de cualquier autoridad, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de</p>
<p>impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuya cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>7. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado en primera instancia, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. Asimismo, conocerá de la ejecución de las obligaciones contenidas en conciliaciones extrajudiciales cuyo trámite de aprobación se haya conocido en primera instancia. En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía. Igualmente, dé los demás procesos ejecutivos cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>8. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y cuya competencia no estuviera asignada por el factor subjetivo al Consejo de Estado.</p> <p>9. De los asuntos relativos a la nulidad del acto de elección por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado o a los tribunales administrativos. Igualmente, conocerán de la nulidad de la elección de los jueces de paz y jueces de reconsideración.</p> <p>10. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.</p> <p>11. Del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño proviene de un acto administrativo de carácter particular, cuando la cuantía</p>	<p>no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>12. La de nulidad del acto de calificación y clasificación de los proponentes, expedida por las Cámaras de Comercio.</p> <p>13. De los de nulidad de los actos administrativos de los distritos y municipios y de las entidades descentralizadas de carácter distrital o municipal que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones hecha por la misma.</p> <p>14. Sin atención a la cuantía, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario que no estén atribuidos a los tribunales o al Consejo de Estado.</p> <p>15. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía contra actos administrativos expedidos por autoridades del orden distrital o municipal, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.</p> <p>16. De todos los demás de carácter contencioso administrativo que involucren entidades del orden municipal o distrital o particulares que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p>17. De la acción de nulidad agraria contra los actos expedidos por la autoridad administrativa sobre asuntos agrarios y rurales cuyas pretensiones patrimoniales excedan el equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>18. De los asuntos contenciosos agrarios y rurales, cualquiera sea el medio de control o acción promovida, cuyas pretensiones patrimoniales excedan el equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>19. De todos los demás asuntos agrarios y rurales relativos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia.</p> <p>20. De los demás asuntos que les asignen leyes especiales</p> <p>Parágrafo. En relación con los asuntos previstos en los numerales 17, 18 y 19 de este artículo, corresponderá a los juzgados agrarios y rurales administrativos la tramitación de estas materias a través del proceso especial agrario y rural.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO III</b></p> <p><b>Competencia de la jurisdicción ordinaria en los asuntos agrarios y rurales</b></p>

<p><b>Artículo 41.</b> Adiciónese el artículo 30A a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 30A. Competencia de la <b>Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia</b>. La Corte Suprema de Justicia conoce en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural los siguientes asuntos relacionados con la especialidad agraria y rural:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Del recurso extraordinario de casación interpuesto contra las providencias que pongan fin al proceso dictadas por parte de las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los Jueces Agrarios y Rurales.</li> <li>2. De los asuntos de naturaleza agraria y rural, de conformidad con el régimen establecido para el efecto, avocados por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social, o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación.</li> <li>3. Del exequátur de sentencias proferidas en país extranjero, en relación con los asuntos de naturaleza agraria y rural, de conformidad con el régimen establecido para el efecto, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales.</li> <li>4. Del reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales proferidos en el extranjero, en relación con los asuntos de naturaleza agraria y rural, de conformidad con el régimen establecido para el efecto y las normas que regulan la materia.</li> <li>5. De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional y que tengan relación con los asuntos de naturaleza agraria y rural, de conformidad con el régimen establecido para el efecto.</li> <li>6. Del recurso extraordinario de revisión contra laudos arbitrales que versen sobre asuntos de naturaleza agraria y rural, de conformidad con el régimen establecido para el efecto, cuya competencia no corresponda al Consejo de Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012.</li> <li>7. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación de carácter agrario y rural tramitados por las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los Jueces Agrarios y Rurales.</li> <li>8. Los demás que les atribuya la Ley.</li> </ol> <p><b>Artículo 42.</b> Adiciónese el artículo 32A a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p>	<p><b>Artículo 32A. Competencia de las salas agrarias y rurales de los tribunales superiores de distrito judicial.</b> Los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala agraria y rural:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia los Jueces Agrarios y Rurales.</li> <li>2. Del recurso de queja contra los autos que nieguen la apelación contra las providencias proferidas por los Jueces Agrarios y Rurales en primera instancia.</li> <li>3. En única instancia, de la aprobación de los acuerdos de conciliación sobre asuntos agrarios y rurales sin cuantía y de mayor cuantía de competencia de la jurisdicción ordinaria.</li> <li>4. En única instancia, del recurso de anulación de laudos arbitrales que versen sobre temas agrarios y rurales, cuya competencia no corresponda al Consejo de Estado, en los términos del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012.</li> <li>5. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 30.</li> <li>6. De los demás asuntos agrarios y rurales que les asigne la ley.</li> </ol> <p><b>Artículo 43.</b> Modifíquese el inciso primero del artículo 17 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 17. Competencia de los jueces civiles, agrarios y rurales municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en virtud de la acción agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.</li> </ol> <p>También conocerán de los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.</p> <p><b>Artículo 44.</b> Modifíquese el inciso primero del artículo 18 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 18. competencia de los jueces civiles municipales en primera instancia. Los jueces civiles municipales conocen en primera instancia:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De los procesos contenciosos de menor cuantía, incluso los originados en virtud de la acción agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.</li> </ol> <p>También conocerán de los procesos contenciosos de menor cuantía por responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.</p> <p><b>Artículo 45.</b> Adiciónese el artículo 22B a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 22B. Competencia de los jueces agrarios y rurales en primera instancia.</p> <p>Los jueces agrarios y rurales del circuito conocerán, en primera instancia, de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De los asuntos contenciosos agrarios y rurales de mayor cuantía de competencia de la jurisdicción ordinaria.</li> <li>2. De las acciones de grupo entre particulares, siempre que la controversia sea de carácter agrario y rural.</li> <li>3. De todos los demás asuntos agrarios y rurales susceptibles de conocimiento por la jurisdicción ordinaria para los cuales no exista regla especial de competencia.</li> <li>4. Los demás que les atribuya la Ley.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IV FACTORES Y CONFLICTOS DE COMPETENCIA</b></p> <p><b>Artículo 46. Determinación de competencias.</b> Para la determinación de competencias se seguirán las reglas establecidas en la Ley 1564 de 2012 y la Ley 1437 de 2011 según la jurisdicción en la que se tramite el asunto, a excepción de la competencia por razón del territorio que seguirá las reglas establecidas en el siguiente artículo.</p> <p><b>Artículo 47. Competencia territorial.</b> En todos los procesos agrarios y rurales de que trata la presente ley será competente de manera privativa el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si estos se encuentran en un territorio abarcado por dos o más municipios o circuitos judiciales, será competente el juez de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el objeto de la controversia no recaiga sobre un bien inmueble, la competencia se determinará por el domicilio del demandante.</p> <p>Cuando fueren varios los jueces o tribunales competentes para conocer del asunto de acuerdo con las reglas previstas en este artículo, conocerá a prevención el juez o tribunal ante el cual se hubiere presentado primero la demanda.</p>	<p><b>Parágrafo.</b> En caso de grave alteración del orden público en el lugar donde se hallen los bienes objeto del proceso agrario o rural, de forma excepcional y a petición del juez o de parte, el proceso podrá adelantarse en un lugar diferente.</p> <p><b>Artículo 48. Conflictos de competencia.</b> Los conflictos de competencia que surjan con ocasión del proceso agrario y rural dispuesto en esta ley se resolverán de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los conflictos de competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se resolverán de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011.</li> <li>2. Los conflictos de competencia entre Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y entre éstas y los jueces agrarios y rurales de diferentes distritos judiciales serán decididos por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.</li> </ol> <p>Si el conflicto se presenta entre jueces agrarios y rurales de un mismo distrito judicial, será decidido por la Sala Agraria y Rural del Tribunal Superior respectivo.</p> <p>Para el trámite del conflicto de competencia en la jurisdicción ordinaria se aplicarán las normas del Código General del Proceso, siempre que sean compatibles con el proceso agrario y rural que esta ley establece.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V Proceso agrario y rural en la especialidad ordinaria</b></p> <p><b>Artículo 49.</b> Adiciónese el Capítulo V al Título III de la Sección Primera del Libro Tercero de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO V Proceso agrario y rural</b></p> <p><b>Artículo 50.</b> Adiciónese el artículo 421A a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421A. Titularidad. Podrán ser parte en el proceso agrario y rural:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toda persona natural o jurídica.</li> <li>2. Toda persona jurídica, de derecho público o privado, las organizaciones sociales, comunitarias, de mujeres, cívicas o de índole similar en nombre de cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad, siempre que</li> </ol>

<p>medie poder para actuar debidamente otorgado bajo las formalidades de ley, sin perjuicio de los derechos que les asiste a los interesados.</p> <p>Las organizaciones sociales, comunitarias, de mujeres, cívicas o de índole similar no podrán generar ningún tipo de cobro relacionados con honorarios, costos procesales o similares a las personas que representen en el proceso agrario y rural.</p> <p>3. La Defensoría del Pueblo en nombre de cualquier persona que se encuentre en condición de vulnerabilidad, sin perjuicio del derecho que les asiste a los interesados.</p> <p><b>Artículo 51.</b> Adiciónese el artículo 421B a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421B. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo conforme a lo establecido en los artículos 73 y siguientes de este código, salvo en la aprobación de las actas de conciliación o actas de colindancia cuando así sea requerido. Las autoridades responsables velarán por el uso prevalente de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para éste propósito el despacho del juez agrario y rural contará con un conciliador en derecho adjunto al Despacho, adicionalmente, la jurisdicción priorizará el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos en diferendos propios de la tenencia y uso de la tierra, para lo cual también apoyará la suscripción de acuerdos de conciliación en casos de diferencias de colindancias. El acta de conciliación prestará mérito ejecutivo de las obligaciones que sean contraídas con ocasión del acuerdo y hará tránsito a cosa juzgada para lo cual deberá ser susceptibles de inscripción en el registro público inmobiliario siempre que medie la voluntad libre de los suscribientes. El registro de las actas de conciliación que versen sobre derechos sobre inmuebles rurales no tendrá costo alguno en la oficina de registro de instrumentos públicos, siempre que las partes hayan invocado el amparo de pobreza en el marco del proceso o que el conciliador de fe de su condición de vulnerabilidad.</p> <p>Respecto de las entidades públicas se aplicará lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p><b>Artículo 52.</b> Adiciónese el artículo 421C a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421C. Presentación de la demanda y su contestación en asuntos agrarios y rurales. La presentación de la demanda y su contestación se regirá por las normas establecidas en el artículo 82 y siguientes de este código, sin perjuicio de los requisitos adicionales que se contemplen en la presente Ley.</p> <p><b>Artículo 53.</b> Adiciónese el artículo 421D a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421D. Requisitos de la demanda en asuntos agrarios y rurales. Además de los requisitos establecidos en el artículo 82 de este código, la demanda deberá indicar:</p>	<p>1. La identificación del predio, que deberá incluir los siguientes datos: ubicación (departamento, municipio o corregimiento), colindantes actuales, el nombre con el cual se conoce el predio en la región, identificación registral, número de la matrícula inmobiliaria, identificación catastral y número de la cédula catastral, cuando estas existieran</p> <p>2. La información de los procedimientos administrativos o procesos judiciales que se adelanten respecto del predio, de los cuales tenga conocimiento el demandante.</p> <p>Parágrafo 1. Las acciones agrarias se podrán presentar en los formatos que para tal efecto autorice el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales serán en todo caso gratuitos.</p> <p>Parágrafo 2. En los casos en que se dificulte la identificación de un predio y cuando se haya decretado el amparo de pobreza, el juez podrá solicitar de oficio o a petición a la entidad territorial correspondiente o al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la información que permita la plena información del predio.</p> <p><b>Artículo 54.</b> Adiciónese el artículo 421E a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 421E. Anexos de la demanda en asuntos agrarios y rurales.</b> Además de los establecidos en este código, de acuerdo con la naturaleza del asunto, la demanda deberá acompañarse de los siguientes anexos:</p> <p>1. La prueba que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso.</p> <p>2. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación legal, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.</p> <p>3. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes.</p> <p><b>Artículo 55.</b> Adiciónese el artículo 421F a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421F. Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. La inadmisión procederá en aquellos eventos en los cuales la demanda no sea subsanable por la actividad oficiosa del juez y se regirá por las demás reglas establecidas en el artículo 90 de este código y otras normas concordantes. En todo caso, el juez privilegiará la decisión de admitir la demanda si el sentido de esta permite comprender el objeto del litigio y garantizar el derecho de defensa de los interesados.</p> <p>El auto que admita la demanda deberá disponer el traslado a la parte demandada,</p>
<p>conforme a las reglas establecidas al respecto en este código, al igual que a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los asuntos de su competencia.</p> <p>Dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación de la demanda deberá notificarse al demandante el auto que la admite o el auto que la inadmite o rechaza.</p> <p>El rechazo de la demanda procederá conforme a lo establecido en este código, y cuando hubiere vencido el término de caducidad para instaurarla.</p> <p>La inadmisión y rechazo de la demanda también procederá para aquellos procesos de restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente de que tratan los artículos 3 y 75 de la Ley 1448 de 2011.</p> <p><b>Artículo 56.</b> Adiciónese el artículo 421G a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421G. Auto admisorio. El auto que admita la demanda deberá disponer:</p> <p>1. Cuando fuere el caso, la inscripción de la demanda en las respectivas oficinas de registro de instrumentos públicos, indicando los folios de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio de inscripción de la demanda por el registrador al juez.</p> <p>2. Cuando fuere el caso, la suspensión y acumulación de los procesos y procedimientos que versen sobre el mismo inmueble o predio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto Ley 902 de 2017 y en esta ley.</p> <p>3. La citación al proceso a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el folio de matrícula inmobiliaria del predio sobre el cual verse la acción y a las autoridades nacionales y regionales que hayan presentado oposiciones o se requiera de su actuación dentro del proceso.</p> <p>4. La publicación del auto admisorio, por el término de quince (15) días, con inclusión de la identificación del predio y el nombre e identificación de la persona a favor de quien se tramita la demanda, para que las personas que consideren tener derechos legítimos relacionados con el predio y/o se consideren afectadas por la suspensión de procesos judiciales y procedimientos administrativos, comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos, en los términos del artículo 421J.</p> <p>5. Cuando fuere el caso, la orden de oficiar a las entidades competentes para efectos de dilucidar si el predio sobre el cual versa el litigio se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:</p> <p>A. Imprescriptibilidad o propiedad de entidades de derecho público, conforme a los artículos 63, 72, 102 y 332 de la Constitución Política y,</p>	<p>en general, bienes cuya posesión, ocupación o transferencia, según el caso, estén prohibidas o restringidas por normas constitucionales o legales.</p> <p>B. Ubicación en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, o aquellas que se definan por estudios geotécnicos que adopte oficialmente la administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cualquier momento.</p> <p>C. Ubicación en zonas o áreas protegidas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2ª de 1959, el Decreto 1076 de 2015 y demás normas complementarias.</p> <p>D. Ubicación en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico, hasta tanto se adelante un manejo especial de recomposición geomorfológica de su suelo que las habilite para el desarrollo urbano.</p> <p>E. Ubicación total o parcial, en terrenos afectados por obra pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989.</p> <p>F. Ubicación en zonas declaradas de inminente riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado, en los términos de la Ley 387 de 1997, sus reglamentos y demás normas que la adicionen o modifiquen, salvo que el poseedor que acuda al proceso se encuentre identificado dentro del informe de derechos sobre inmuebles y territorios a los que se refiere el Decreto 1071 de 2015.</p> <p>G. Destinación a actividades ilícitas.</p> <p>6. La comunicación a la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de actualizar la información en el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO.</p> <p><b>Artículo 57.</b> Adiciónese el artículo 421H a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así</p> <p>Artículo 421H. Notificación y publicidad del auto admisorio de la demanda agraria. La notificación del auto admisorio de la demanda se hará en la forma señalada en los artículos 289 a 301 de este Código o en aquella que ordene el juez con la finalidad de otorgarle amplia publicidad y la oportunidad real y efectiva de comparecer al proceso a quienes consideren afectados sus derechos.</p> <p>Parágrafo. En los procesos en los cuales se discutan derechos sobre inmuebles ubicados en suelo rural, el Juez deberá disponer la publicación del auto admisorio de</p>



<p>la demanda en el Registro Nacional de Personas Emplazadas de que trata el artículo 108 de este código.</p> <p>Cuando se trate de procesos de pertenencia, adicionalmente se debe surtir la actuación respectiva en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia de que trata el parágrafo 2º del artículo 375 de este código.</p> <p><b>Artículo 58.</b> Adiciónese el artículo 421I a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421I. Difusión. Las alcaldías municipales dispondrán de espacios físicos y a través de las emisoras comunitarias, conforme a la normatividad vigente, para la publicación de las citaciones derivadas de los autos admisorios de las demandas que se presenten en los respectivos entes territoriales, cuando se trate de personas que carezcan de medios para asumir los costos de la citación o gocen de amparo de pobreza o se requiera por solicitud de las asociaciones u organizaciones campesinas, sociales o de mujeres.</p> <p><b>Artículo 69.</b> Adiciónese el artículo 421J a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421J. Contestación. La contestación de la demanda se deberá presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto admisorio, en la forma establecida en el artículo 96 de este código.</p> <p><b>Artículo 60.</b> Adiciónese el artículo 421K a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421K. Decreto de pruebas. El juez proferirá auto de decreto de pruebas en el que señalará el término de treinta (30) días para que se practiquen, la fecha de la audiencia pública de pruebas y alegatos, y las diligencias que considere necesarias.</p> <p>Parágrafo. Cuando el juez lo estime necesario, el término probatorio se podrá prorrogar por treinta (30) días adicionales.</p> <p><b>Artículo 61.</b> Adiciónese el artículo 421L a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421L. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.</p> <p>No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido</p>	<p>directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en el cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.</p> <p>Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso de apelación, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código y respetará las garantías procesales de las partes.</p> <p>Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.</p> <p><b>Artículo 62.</b> Adiciónese el artículo 421M a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p><b>Artículo 421M. Inspección judicial.</b> Para la verificación de la identificación del bien inmueble objeto del proceso, los hechos y derechos relacionados, la explotación económica, el cumplimiento del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el esclarecimiento de los hechos materia del proceso, será precedente la inspección judicial, para ofrecer certeza acerca de las condiciones materiales del predio, sus circunstancias de ocupación, posesión, explotación e identificación predial y demás que fueren objeto de la pretensión y conocimiento del juez competente, para lo cual se tendrá en cuenta si sobre el inmueble se está implementando o se ha implementado las normas de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural por parte de la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p>El decreto y práctica de la inspección judicial se acogerá a lo dispuesto en el artículo 236 de este código.</p> <p>La práctica de la prueba deberá correr a cargo de quien la solicita, para lo cual dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto que la decreta, deberá sufragar los gastos que conlleva la práctica de esta. De no cancelar el valor correspondiente dentro del término establecido, se entenderá que se desiste de la prueba. Lo dispuesto en el presente inciso respecto del cobro de la prueba, no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas como beneficiarias a título gratuito o tengan amparo de pobreza, y de manera proporcional respecto de aquellos que hayan sido categorizados como beneficiarios a título parcialmente gratuito.</p> <p><b>Artículo 63.</b> Adiciónese el artículo 421N a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421N. Prueba pericial. La prueba pericial en el proceso agrario y rural se registrará por las normas establecidas en este capítulo, y en lo no previsto por las demás normas de este código.</p> <p>Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete. El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.</p>
<p>Cuando el dictamen sea aportado por las partes, la oportunidad y contradicción se registrará por lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes de este código.</p> <p><b>Artículo 64.</b> Adiciónese el artículo 421O a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421O. Trámite del dictamen pericial solicitado o decretado de oficio. Cuando en la oportunidad para pedir pruebas se solicite el decreto de un dictamen pericial, o cuando el mismo se decreta de oficio, se aplicarán las siguientes reglas:</p> <p>El juez o magistrado ponente resolverá de plano la recusación o manifestación de impedimento del perito mediante auto que no tendrá recurso alguno, lo cual se podrá realizar antes de la posesión del perito.</p> <p>El perito designado será posesionado con las advertencias de ley y previo juramento.</p> <p>Si es del caso, el juez o magistrado ponente ordenará a la parte que solicitó el dictamen que le suministre al perito lo necesario para viáticos y gastos de la pericia, dentro del término que al efecto señale. Este término podrá ser prorrogado por una sola vez.</p> <p>Si quien pidió el dictamen no consigna las sumas ordenadas dentro del término otorgado, se entenderá que desiste de la prueba.</p> <p><b>Artículo 65.</b> Adiciónese el artículo 421P a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421P. Contradicción del dictamen pericial a solicitud de parte o decretado de oficio. En estos casos, se seguirán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendido el dictamen, se correrá traslado a las partes por un término de cinco (5) días hábiles, dentro del cual aquellas podrán solicitar aclaraciones o complementaciones. Si se solicitan aclaraciones o complementaciones al dictamen se dispondrá que el perito las realice en el término que se fije y una vez presentadas se correrá traslado de estas a las partes, por un término de tres (3) días.</li> <li>2. En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Con el fin de controvertirlo, dentro del término de su traslado, o del de sus aclaraciones o complementaciones, las partes podrán presentar dictamen pericial o testigos técnicos que, habiendo tenido participación en los hechos materia del proceso, tengan conocimientos profesionales o especializados en la materia. Excepcionalmente, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá convocar a los peritos a la audiencia pública de pruebas y alegatos, quienes deberán concurrir obligatoriamente y podrán ser interrogados por el juez y por las partes con fines de contradicción.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> En los casos en que el dictamen pericial fuere rendido por una autoridad pública, sea aportado o solicitado por las partes o decretado de oficio, se prescindirá</p>	<p>de la audiencia, salvo que el juez la estime indispensable.</p> <p><b>Artículo 66.</b> Adiciónese el artículo 421Q a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421Q. Honorarios del perito. Practicado el dictamen pericial y surtida la contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito mediante auto.</p> <p>La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago de los honorarios del perito. Cuando el dictamen sea decretado de oficio corresponderá su pago a las partes en igual proporción. En el evento en que una de las partes no pague lo que le corresponde, la otra parte podrá asumir dicho pago.</p> <p>Parágrafo 1º. De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura mantendrá un listado debidamente actualizado de peritos en todas las áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien integre la lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y la disponibilidad para rendir el dictamen. Igualmente, establecerá los parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios prestados por los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios de cada profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial.</p> <p>Parágrafo 2º. El pago de honorarios, gastos y viáticos no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas como beneficiarias a título gratuito o tengan amparo de pobreza, y de manera proporcional respecto de aquellas que hayan sido categorizadas como beneficiarias a título parcialmente gratuito.</p> <p><b>Artículo 67.</b> Adiciónese el artículo 421R a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421R. Reglas especiales para las entidades públicas. Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo, se faculta a las entidades públicas para que mediante contratación directa seleccionen los expertos que atenderán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta pericia también podrá ser contratada durante las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005.</p> <p>En los anteriores términos se modifica la Ley 80 de 1993, en lo relativo a la contratación directa para la pericia judicial.</p> <p>Cuando la experticia sea rendida por una entidad pública el juez deberá ordenar honorarios a favor de esta.</p> <p><b>Artículo 68.</b> Adiciónese el artículo 421S a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p>

<p>Artículo 421S. Audiencia pública de pruebas y alegatos. El juez instalará la audiencia pública de pruebas y alegatos con la presencia de los apoderados de las partes, quienes deberán acudir obligatoriamente. También podrán asistir las partes, terceros y demás intervinientes.</p> <p>Previo a la práctica de pruebas, el juez decidirá de oficio o a petición de parte sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.</p> <p>A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión. Cuando sea procedente, fijará el objeto del litigio, precisará los hechos que considera demostrados y rechazará las pruebas decretadas que estime innecesarias.</p> <p>1. Luego, practicará las demás pruebas de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o a solicitud de parte.</li> <li>2. Las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes.</li> <li>3. La exhibición de los documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas y practicadas.</li> </ol> <p>Practicadas las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a los demás intervinientes, por el tiempo que el juez estime necesario. Una vez escuchados los alegatos el juez finalizará la audiencia.</p> <p>Parágrafo 1°. La inasistencia de los apoderados a esta audiencia sólo podrá excusarse mediante prueba sumaria de una justa causa.</p> <p>Parágrafo 2°. En cualquier etapa de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias.</p> <p><b>Artículo 69.</b> Adiciónese el artículo 421T a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 421T. Sentencia. El juez proferirá sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia pública, conforme al artículo 280 y al parágrafo segundo del artículo 281 de la Ley 1564 de 2012. Igualmente, atenderá lo dispuesto en esta Ley respecto a la posibilidad de fallar “ultra o extra petita”.</p> <p>Ejecutoriada la sentencia su cumplimiento será inmediato. En todo caso, el juez mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos reconocidos en la sentencia, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecución</p>	<p>que sean necesarias, en procura de cuya eficacia las autoridades administrativas tendrán el deber de prestar el apoyo que solicite el juez, conforme a esta Ley, así como de acuerdo con las disposiciones establecidas para el efecto en la Ley 1564 de 2012.</p> <p>Parágrafo 1°. Incurrirá en causal de mala conducta el funcionario que omite o retarde injustificadamente el cumplimiento de las órdenes contenidas en el fallo o no brinde al juez el apoyo requerido por éste para la ejecución de la sentencia.</p> <p>Parágrafo 2°. En la sentencia, el juez o magistrado deberá ordenar la declaración de derechos de propiedad, uso y tenencia de la tierra en favor del beneficiario y de su cónyuge, compañero o compañera permanente, cuando se verifique que este último tiene una relación directa con el predio o como resultado del reconocimiento de su aporte al trabajo agrario y a la economía del cuidado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1413 de 2010. El juez podrá impartir órdenes catastrales y registrales.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VI</b> <b>Proceso agrario y rural en la especialidad contencioso administrativa</b></p> <p><b>Artículo 70.</b> Adiciónese el Título V A a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V-A</b> <b>DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA TRAMITACIÓN DE ASUNTOS</b> <b>AGRARIOS Y RURALES.</b></p> <p><b>Artículo 71.</b> Adiciónese el artículo 247A a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247A. Titularidad. Podrán ser parte en el proceso agrario y rural:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toda persona natural o jurídica.</li> <li>2. Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, incluidas las organizaciones sociales, comunitarias, de mujeres, cívicas o de índole similar en nombre de cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad, siempre que medie poder para actuar debidamente otorgado bajo las formalidades de ley, sin perjuicio de los derechos que les asiste a los interesados.</li> <li>3. La Defensoría del Pueblo en nombre de cualquier persona que se encuentre en condición de vulnerabilidad, sin perjuicio del derecho que les asiste a los interesados.</li> </ol> <p><b>Artículo 72.</b> Adiciónese el artículo 247B a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247B. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo conforme a lo establecido en los artículos 73 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, salvo en la aprobación de las actas de conciliación.</p>
<p>Respecto de las entidades públicas se aplicará lo dispuesto en el artículo 160 de este código.</p> <p>Parágrafo. Las asociaciones campesinas, las organizaciones sociales y las comunidades podrán ejercer asesoría, acompañamiento y coadyuvancia, a fin de procurar el reconocimiento y la protección de los derechos involucrados en el proceso.</p> <p><b>Artículo 73.</b> Adiciónese el artículo 247C a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247C. Presentación de la demanda y su contestación. La presentación de la demanda y su contestación se regirá por las normas establecidas en el artículo 82 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en este capítulo.</p> <p><b>Artículo 74.</b> Adiciónese el Artículo 247D a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247D. Requisitos de la demanda. Además de los requisitos establecidos en el artículo 162 de este código, la demanda deberá indicar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, las normas presuntamente vulneradas y explicarse el concepto de su violación.</li> <li>1. La identificación del predio, que deberá incluir los siguientes datos: ubicación (departamento, municipio o corregimiento), colindantes actuales, el nombre con el cual se conoce el predio en la región, identificación registral, número de la matrícula inmobiliaria, identificación catastral y número de la cédula catastral, cuando estas existieran.</li> <li>2. La información de los procedimientos administrativos o procesos judiciales que se adelanten respecto del predio, de los cuales tenga conocimiento el demandante.</li> </ol> <p>Parágrafo. Las acciones agrarias se podrán presentar en los formatos que para tal efecto autorice el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales serán en todo caso gratuitos.</p> <p><b>Artículo 75.</b> Adiciónese el artículo 247E a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247E. Anexos de la demanda. Además de los establecidos en la Ley 1564 de 2012 y/o en este código, de acuerdo con la naturaleza del asunto, la demanda deberá acompañarse de los siguientes anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En los asuntos en los cuales la demanda sea presentada por la Agencia Nacional de Tierras, ésta deberá aportar copia del informe técnico jurídico al que se refiere el Decreto Ley 902 de 2017 y de los demás documentos que integren el expediente,</li> </ol>	<p>acopiados en desarrollo del procedimiento administrativo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Copia del acto acusado con su constancia de ejecutoria. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren.</li> <li>3. Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por su presentación, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el juez antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.</li> <li>4. La prueba que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso.</li> <li>5. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación legal, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.</li> <li>6. Copias de la demanda para las partes.</li> </ol> <p><b>Artículo 76.</b> Adiciónese el artículo 247F a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247F. Admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. La inadmisión procederá en aquellos eventos en los cuales la demanda no sea subsanable por la actividad oficiosa del juez y se regirá por las reglas establecidas en el artículo 170 de este código, en concordancia con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1564 de 2012. En todo caso, el juez privilegiará la decisión de admitir la demanda si el sentido de esta permite comprender el objeto del litigio y garantizar el derecho de defensa de los interesados.</p> <p>El auto que admita la demanda deberá disponer el traslado a la parte demandada, conforme a las reglas establecidas al respecto en el artículo 91 de la Ley 1564 de 2012, al igual que a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los asuntos de su competencia.</p> <p>Dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación de la demanda deberá notificarse al demandante el auto que la admite o el auto que la inadmite o rechaza.</p> <p>El rechazo de la demanda procederá conforme a lo establecido en el artículo 169 de este código.</p> <p>La inadmisión y rechazo de la demanda también procederá para aquellos procesos de</p>

<p>restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente de que tratan los artículos 3 y 75 de la Ley 1448 de 2011.</p> <p><b>Artículo 77.</b> Adiciónese el artículo 247G a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247G. Auto admisorio. El auto que admita la demanda deberá disponer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando fuere el caso, la inscripción de la demanda en las respectivas oficinas de registro de instrumentos públicos, indicando los folios de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio de inscripción por el registrador al juez. Si el predio no cuenta con folio de matrícula inmobiliaria, ordenar la apertura de este a nombre de la Nación, siempre y cuando la controversia verse sobre derechos reales.</li> <li>2. Cuando fuere el caso, la suspensión y acumulación de los procesos y procedimientos que versen sobre el mismo inmueble o predio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto Ley 902 de 2017 y en esta ley.</li> <li>3. La citación al proceso a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el folio de matrícula inmobiliaria del predio sobre el cual verse la acción y a las autoridades nacionales y regionales que hayan presentado oposiciones o se requiera de su actuación dentro del proceso.</li> <li>4. La publicación del auto admisorio, por el término de quince (15) días, con inclusión de la identificación del predio y el nombre e identificación de la persona a favor de quien se tramita la demanda, para que las personas que consideren tener derechos legítimos relacionados con el predio y/o se consideren afectadas por la suspensión de procesos judiciales y procedimientos administrativos, comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos.</li> <li>5. Cuando fuere el caso, la orden de oficiar a las entidades competentes para efectos de dilucidar si el predio sobre el cual versa el litigio se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Imprescriptibilidad o propiedad de entidades de derecho público, conforme a los artículos 63, 72, 102 y 332 de la Constitución Política y, en general, bienes cuya posesión, ocupación o transferencia, según el caso, estén prohibidas o restringidas por normas constitucionales o legales.</li> <li>b. Ubicación en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, o aquellas que se definan por estudios geotécnicos que adopte oficialmente la administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en cualquier momento.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Ubicación en zonas o áreas protegidas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2ª de 1959, el Decreto 1076 de 2015 y demás normas complementarias.</li> <li>d. Ubicación en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico, hasta tanto se adelante un manejo especial de recomposición geomorfológica de su suelo que las habilite para el desarrollo urbano.</li> <li>e. Ubicación total o parcial, en terrenos afectados por obra pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989.</li> <li>f. Ubicación en zonas declaradas de inminente riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado, en los términos de la Ley 387 de 1997, sus reglamentos y demás normas que la adicionen o modifiquen, salvo que el poseedor que acuda a este proceso se encuentre identificado dentro del informe de derechos sobre inmuebles y territorios a los que se refiere el Decreto 1071 de 2015.</li> <li>g. Destinación a actividades ilícitas.</li> </ol> <p>6. La comunicación a la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de actualizar la información en el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO.</p> <p><b>Artículo 78.</b> Adiciónese el artículo 247H a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247H. Notificación del auto admisorio de la demanda agraria. La notificación del auto admisorio de la demanda se hará en la forma señalada en los artículos 289 a 301 de la Ley 1564 de 2012 o en aquella que ordene el juez con la finalidad de otorgarle amplia publicidad y la oportunidad real y efectiva de comparecer al proceso a quienes consideren afectados sus derechos o estimen que el acto administrativo de la Agencia Nacional de Tierras, no cuenta con soporte material o jurídico.</p> <p>Con la publicación de que trata este artículo se entenderá surtido el traslado de la demanda a las personas indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos legítimos y a quienes se consideren afectados por el mismo.</p> <p>Parágrafo. En los procesos en los cuales se discutan derechos sobre inmuebles ubicados en suelo rural, el juez deberá disponer la publicación del auto admisorio de la demanda en el Registro Nacional de Personas Emplazadas de que trata el artículo 108 de la Ley 1564 de 2012.</p> <p>Cuando se trate de procesos de pertenencia, adicionalmente se debe surtir la actuación respectiva en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia del que trata el parágrafo</p>
<p>2º del artículo 375 de la Ley 1564 de 2012.</p> <p><b>Artículo 79.</b> Adiciónese el artículo 247I a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247I. Difusión. Las alcaldías municipales dispondrán de espacios físicos y a través de las emisoras comunitarias, conforme a la normatividad vigente, para la publicación de las citaciones derivadas de los autos admissorios de las demandas que se presenten en los respectivos entes territoriales, cuando se trate de personas que carezcan de medios para asumir los costos de la citación o gocen de amparo de pobreza o se requiera por solicitud de las asociaciones u organizaciones campesinas, sociales o de mujeres.</p> <p><b>Artículo 80.</b> Adiciónese el artículo 247J a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247J. Contestación. La contestación de la demanda se deberá presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto admisorio, en la forma establecida en el artículo 96 de la Ley 1564 de 2012.</p> <p><b>Artículo 81.</b> Adiciónese el artículo 247K a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247K. Decreto de pruebas. El juez proferirá auto de decreto de pruebas en el que señalará el término de treinta (30) días para que se practiquen, la fecha de la audiencia pública de pruebas y alegatos, y las diligencias que considere necesarias.</p> <p>Parágrafo. Cuando el juez lo estime necesario, el término probatorio se podrá prorrogar por treinta (30) días adicionales.</p> <p><b>Artículo 82.</b> Adiciónese el artículo 247L a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247L. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad para decretar pruebas de oficio, prevista en la Ley 1564 de 2012.</p> <p>No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, mediante providencia motivada expedida de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.</p> <p>Se considerará que una parte está en mejor posición para probar un asunto relevante al proceso en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de</p>	<p>incapacidad en el cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.</p> <p>Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso de apelación, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en la Ley 1564 de 2012.</p> <p><b>Artículo 83.</b> Adiciónese el artículo 247M a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247M. Inspección judicial. Para la verificación de la identificación del bien inmueble objeto del proceso, los hechos y derechos relacionados, la explotación económica, el cumplimiento de las normas de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el esclarecimiento de los hechos materia del proceso, será procedente la inspección judicial, siempre que el informe técnico-jurídico y demás anexos no ofrezcan certeza acerca de las condiciones materiales del predio, sus circunstancias de ocupación, posesión, explotación e identificación predial y demás que fueren objeto de la pretensión y conocimiento del juez competente, siempre y cuando se trate de conflictos que versen sobre bienes inmuebles ubicados en zonas en las cuales se esté implementando o haya implementado las normas de ordenamiento social de la propiedad rural por parte de la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p>El decreto y práctica de la inspección judicial se acogerá a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 1564 de 2012.</p> <p>La práctica de la prueba deberá correr a cargo de quien la solicita, para lo cual dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto que la decreta, deberá sufragar los gastos que conlleva la práctica de esta. De no cancelar el valor correspondiente dentro del término establecido se entenderá que se desiste de la prueba. Lo dispuesto en el presente inciso respecto del cobro de la prueba, no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas como beneficiarias a título gratuito o tengan amparo de pobreza, y de manera proporcional respecto de aquellas que hayan sido categorizadas como beneficiarias a título parcialmente gratuito.</p> <p><b>Artículo 84.</b> Adiciónese el artículo 247N a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247N. Prueba pericial. La prueba pericial en el proceso agrario y rural se regirá por las normas establecidas en este capítulo, y en lo no previsto por las demás normas del Código General del Proceso.</p> <p>Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete. El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.</p> <p>Cuando el dictamen sea aportado por las partes, la oportunidad y contradicción se regirá por lo dispuesto en los artículos 226 y siguientes del Código General del</p>

<p>Proceso.</p> <p><b>Artículo 85.</b> Adiciónese el artículo 247O a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247O. Trámite del dictamen pericial solicitado o decretado de oficio. Cuando en la oportunidad para pedir pruebas se solicite el decreto de un dictamen pericial, o cuando el mismo se decreta de oficio, se aplicarán las siguientes reglas:</p> <p>El juez o magistrado ponente resolverá de plano la recusación o manifestación de impedimento del perito mediante auto que no tendrá recurso alguno, lo cual se podrá realizar antes de la posesión del perito.</p> <p>El perito designado será posesionado con las advertencias de ley y previo juramento.</p> <p>Si es del caso, el juez o magistrado ponente ordenará a la parte que solicitó el dictamen que le suministre al perito lo necesario para viáticos y gastos de la pericia, dentro del término que al efecto señale. Este término podrá ser prorrogado por una sola vez.</p> <p>Si quien pidió el dictamen no consigna las sumas ordenadas dentro del término otorgado, se entenderá que desiste de la prueba.</p> <p><b>Artículo 86.</b> Adiciónese el artículo 247P a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247P. Contradicción del dictamen pericial a solicitud de parte o decretado de oficio. En estos casos, se seguirán las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendido el dictamen, se correrá traslado a las partes por un término de cinco (5) días hábiles, dentro del cual aquellas podrán solicitar aclaraciones o complementaciones. Si se solicitan aclaraciones o complementaciones al dictamen se dispondrá que el perito las realice en el término que se fije y una vez presentadas se correrá traslado de estas a las partes, por un término de tres (3) días.</li> <li>2. En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Con el fin de controvertirlo, dentro del término de su traslado, o del de sus aclaraciones o complementaciones, las partes podrán presentar dictamen pericial o testigos técnicos que, habiendo tenido participación en los hechos materia del proceso, tengan conocimientos profesionales o especializados en la materia. Excepcionalmente, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá convocar a los peritos a la audiencia pública de pruebas y alegatos, quienes deberán concurrir obligatoriamente y podrán ser interrogados por el juez y por las partes con fines de contradicción.</li> </ol> <p><b>Parágrafo.</b> En los casos en que el dictamen pericial fuere rendido por una autoridad pública, sea aportado o solicitado por las partes o decretado de oficio, se prescindirá de la audiencia, salvo que el juez la estime indispensable.</p>	<p><b>Artículo 87.</b> Adiciónese el artículo 247Q a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247Q. Honorarios del perito. Practicado el dictamen pericial y surtida la contradicción de este, el juez fijará los honorarios del perito mediante auto.</p> <p>La parte que haya solicitado el dictamen pericial asumirá el pago de los honorarios del perito. Cuando el dictamen sea decretado de oficio corresponderá su pago a las partes en igual proporción. En el evento en que una de las partes no pague lo que le corresponde, la otra parte podrá asumir dicho pago.</p> <p>Parágrafo 1°. De conformidad con lo indicado en el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura mantendrá un listado debidamente actualizado de peritos en todas las áreas del conocimiento que se requieran. Se garantizará que quien integre la lista tenga los conocimientos, la idoneidad, la experiencia y la disponibilidad para rendir el dictamen. Igualmente, establecerá los parámetros y tarifas para la remuneración de los servicios prestados por los peritos de acuerdo con los precios del mercado para los servicios de cada profesión. En el caso de que se trate de un asunto de especial complejidad, la autoridad judicial podrá fijar los honorarios al perito sin sujeción a la tarifa oficial.</p> <p>Parágrafo 2°. El pago de honorarios, gastos y viáticos no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas como beneficiarias a título gratuito o tengan amparo de pobreza, y de manera proporcional respecto de aquellas que hayan sido categorizadas como beneficiarias a título parcialmente gratuito.</p> <p><b>Artículo 88.</b> Adiciónese el artículo 247R a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247R. Reglas especiales para las entidades públicas.</p> <p>Para aportar el dictamen pericial o contradecirlo, se faculta a las entidades públicas para que mediante contratación directa seleccionen los expertos que atenderán la prueba pericial requerida en un proceso judicial. Esta pericia también podrá ser contratada durante las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005.</p> <p>En los anteriores términos se modifica la Ley 80 de 1993, en lo relativo a la contratación directa para la pericia judicial.</p> <p>Cuando la experticia sea rendida por una entidad pública el juez deberá ordenar honorarios a favor de esta.</p> <p><b>Artículo 89.</b> Adiciónese el artículo 247S a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p>
<p>Artículo 247S. Audiencia pública de pruebas y alegatos. El juez instalará la audiencia pública de pruebas y alegatos con la presencia de los apoderados de las partes, quienes deberán acudir obligatoriamente. También podrán asistir las partes, terceros y demás intervinientes.</p> <p>Previo a la práctica de pruebas, el juez decidirá de oficio o a petición de parte sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.</p> <p>A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión. Cuando sea procedente, fijará el objeto del litigio, precisará los hechos que considera demostrados y rechazará las pruebas decretadas que estime innecesarias.</p> <p>Luego, practicará las demás pruebas de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o a solicitud de parte.</li> <li>2. Las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes.</li> <li>3. La exhibición de los documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas y practicadas.</li> </ol> <p>Practicadas las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, y posteriormente a los demás intervinientes, por el tiempo que el juez estime necesario. Una vez escuchados los alegatos el juez finalizará la audiencia.</p> <p>Parágrafo 1°. La inasistencia de los apoderados a esta audiencia sólo podrá excusarse mediante prueba sumaria de una justa causa.</p> <p>Parágrafo 2°. En cualquier etapa de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias.</p> <p><b>Artículo 90.</b> Adiciónese el artículo 247S a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 247S. Sentencia. El juez proferirá sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia pública, conforme al artículo 187 de este código y al parágrafo segundo del artículo 281 de la Ley 1564 de 2012. Igualmente, atenderá lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, respecto a la posibilidad de fallar "ultra o extra petita".</p> <p>Ejecutoriada la sentencia su cumplimiento será inmediato. En todo caso, el juez mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos reconocidos en la sentencia, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecución que sean necesarias, en procura de cuya eficacia las autoridades administrativas</p>	<p>tendrán el deber de prestar el apoyo que solicite el juez, conforme a esta Ley, así como de acuerdo con las disposiciones establecidas para el efecto en la Ley 1564 de 2012.</p> <p>Parágrafo 1°. Incurrirá en falta gravísima el funcionario que omita o retarde injustificadamente el cumplimiento de las órdenes contenidas en el fallo o no brinde al Juez el apoyo requerido por éste para la ejecución de la sentencia.</p> <p>Parágrafo 2°. En la sentencia, el juez o magistrado deberá ordenar la declaración de derechos de propiedad, uso y tenencia de la tierra en favor del beneficiario y de su cónyuge, compañero o compañera permanente, cuando se verifique que este último tiene una relación directa con el predio o como resultado del reconocimiento de su aporte al trabajo agrario y a la economía del cuidado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1413 de 2010. El juez podrá impartir órdenes catastrales y registrales.</p> <p>Parágrafo 3°. Además de lo dispuesto en los artículos 280 del Código General del Proceso y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sentencia deberá contener una valoración del informe técnico jurídico practicado en el procedimiento administrativo adelantado por la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p><b>Artículo 91.</b> Adiciónese un parágrafo al artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, así</p> <p>Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.</p> <p>Parágrafo. El recurso extraordinario de revisión procederá en la Especialidad Agraria y Rural en los mismos términos previstos en esta Ley.</p> <p><b>Artículo 92.</b> Adiciónese un parágrafo 2 al artículo 257 de la Ley 1437 de 2011, así:</p> <p>Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda de los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doseientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvertan actos</li> </ol>



<p>administrativos de cualquier autoridad.</p> <p>2. Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.</p> <p>3. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las entidades estatales, en sus distintos órdenes.</p> <p>4. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.</p> <p>Parágrafo. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía. Este recurso no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.</p> <p>Parágrafo 2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procederá en la Especialidad Agraria y Rural en los mismos términos previstos en esta Ley</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VII</b> <b>Notificaciones, medidas cautelares, excepciones previas y acumulación procesal en el proceso agrario y rural</b></p> <p><b>Artículo 93. Notificaciones.</b> Las providencias se notificarán en las condiciones prescritas en esta ley y, en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1564 de 2012.</p> <p><b>Artículo 94. Medidas cautelares, procedencia y trámite.</b> Las medidas cautelares procedentes en la justicia especial agraria y rural, de acuerdo con la jurisdicción ante la cual se tramiten y la naturaleza del asunto, se regirán por lo establecido en los artículos 229 a 241 de la Ley 1437 de 2011, así como en los artículos 590 a 604 de la Ley 1564 de 2012.</p> <p>Así mismo, las medidas cautelares podrán ser decretadas de oficio, a través de decisión motivada.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, el Juez o Magistrado podrá decretar medidas cautelares de protección de predios en zonas de inminente desplazamiento o desplazamiento forzado, de acuerdo con la Ley 387 de 1997.</p> <p><b>Artículo 95. Excepciones previas.</b> Las excepciones previas que se propongan por las partes serán resueltas previamente a la realización de la audiencia pública de pruebas y alegatos,</p>	<p>de acuerdo con lo previsto sobre el particular en esta ley.</p> <p><b>Artículo 96. Acumulación procesal.</b> Cuando el objeto de la demanda verse sobre la tenencia, propiedad y/o posesión sobre un mismo predio, el juez agrario y rural o el juez agrario y rural administrativo acumulará los procesos judiciales respectivos. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 del Decreto Ley 902 de 2017.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO VIII</b> <b>Recursos ordinarios en el proceso agrario y rural</b></p> <p><b>Artículo 97. Procedencia del recurso de apelación.</b> Son apelables las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces agrarios y rurales y por los jueces agrarios y rurales administrativos.</p> <p>También serán apelables los siguientes autos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.</li> <li>2. El que decrete una medida cautelar.</li> <li>3. El que ponga fin al proceso, salvo el que apruebe la conciliación.</li> <li>4. El que decreta las nulidades procesales.</li> <li>5. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente y el que distribuya la carga probatoria.</li> </ol> <p>El recurso de apelación se concederá en efecto suspensivo respecto de los autos enunciados en los numerales 1 y 3. En cuanto a los autos de los numerales 2, 4 y 5 se concederá en el efecto devolutivo.</p> <p>El trámite de la apelación contra sentencias se surtirá en la forma establecida en la Ley 1564 de 2012.</p> <p><b>Artículo 98. Procedencia del recurso de reposición.</b> El recurso de reposición procede contra todas las providencias interlocutorias que no sean apelables o suplicables y será improcedente frente a los autos de trámite, sin perjuicio de las solicitudes de aclaración o complementación, cuando se configuren los supuestos respectivos.</p> <p>El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan los recursos de apelación, súplica o queja.</p> <p>El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.</p>
<p><b>Artículo 99. Trámite de los recursos ordinarios.</b> Los recursos de reposición, apelación, súplica y queja se tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 318 a 332 y 352 a 353 de la Ley 1564 de 2012.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO IX</b> <b>Recursos extraordinarios y avocación de competencia</b></p> <p><b>Artículo 100.</b> Adiciónese el Capítulo III en el Título VII de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO X</b> <b>Mecanismo eventual de revisión para los asuntos agrarios y rurales</b></p> <p><b>Artículo 101.</b> Adiciónese el artículo 274A a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 274A. Revisión eventual. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o la providencia que ponga fin al proceso en un asunto agrario o rural que se tramite ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez o tribunal competente de oficio, remitirá el expediente a la Sección Primera Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para su eventual revisión por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de unificar o de sentar jurisprudencia.</p> <p>La decisión sobre la selección o no de la providencia respectiva se debe proferir dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo del proceso por parte de salas duales compuestas por Consejeros de la Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. La decisión de no selección de una providencia no requerirá motivación y se notificará por estado.</p> <p><b>Artículo 102.</b> Adiciónese el artículo 274B a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 274B. Insistencia. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión que negó la selección, el Consejero de la Sección Primera Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que no participó en la decisión, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Agrarios y de Restitución de Tierras, el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrán insistir en la revisión de la providencia respectiva, argumentando las razones que hacen necesaria dicha determinación, de acuerdo con los criterios definidos en el artículo anterior.</p> <p><b>Artículo 103.</b> Adiciónese el artículo 274C a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 274C. Efectos. El trámite de revisión eventual no suspende los efectos de la providencia seleccionada. Sin embargo, excepcionalmente y de forma motivada, la</p>	<p>Subsección B del Consejo de Estado en su Sala Plena podrá suspender el cumplimiento de la providencia por razones de orden público o para evitar un perjuicio irremediable.</p> <p><b>Artículo 104.</b> Adiciónese el artículo 274D a la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 274D. Decisión. Si prospera la revisión eventual, total o parcialmente, se invalidará, en lo pertinente, la sentencia o el auto, y se dictará la providencia de reemplazo o se adoptarán las disposiciones que correspondan, según el caso. Si la sentencia objeto de revisión se cumple en forma total o parcial, la sentencia de unificación dejará sin efectos los actos procesales realizados y dispondrá que el juez que tramitó la única o primera instancia ejecute las órdenes sobre las restituciones y adopte las medidas a que haya lugar.</p> <p>La sentencia que decida sobre providencia revisada tendrá el carácter de sentencia de unificación y deberá proferirse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su selección.</p> <p><b>Artículo 105.</b> Agréguese el artículo 421U a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará</p> <p>Artículo 421U. Avocación de competencia en la especialidad agraria y rural de la jurisdicción ordinaria. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia podrá asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo de única o de segunda instancia de las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las Salas Agrarias y Rurales de los tribunales, o a petición del Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos en que sea competente.</p> <p>En estos casos corresponde a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia dictar sentencias de unificación jurisprudencial con efectos jurídicos en su respectiva jurisdicción.</p> <p>Para asumir el trámite por solicitud de parte, petición del Ministerio Público o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o por remisión de los Tribunales, se deberá exponer las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.</p> <p>La solicitud que eleve una de las partes, el Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que la Corporación respectiva adopte dicha decisión.</p>

<p>La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.</p> <p><b>Artículo 106.</b> Adiciónese el Capítulo IV en el Título VII de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO XI</b> Mecanismo de avocación de competencia en asuntos agrarios y rurales</p> <p><b>Artículo 107.</b> Adiciónese el artículo 274E la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 274E. Avocación de competencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia, la Sección Primera Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado podrá asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo de única o de segunda instancia de las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Administrativos, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las mismas salas Agrarias y Rurales de los tribunales, o a petición del Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los procesos en que sea competente</p> <p>En estos casos corresponde a la Sección Primera Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de unificación jurisprudencial con efectos jurídicos en la especialidad agraria y rural de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.</p> <p>Para asumir el trámite por solicitud de parte, petición del Ministerio Público o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o por remisión de los Tribunales, se deberá exponer las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.</p> <p>La solicitud que eleve una de las partes, el Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que la Sección Primera Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que esta adopte dicha decisión.</p> <p>La Sección Primera Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos.</p> <p><b>Artículo 107.</b> Adiciónese el artículo 351A a la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p>	<p>Artículo 351A. Trámite del recurso. El recurso extraordinario de casación para asuntos agrarios y rurales se tramitará de acuerdo con las reglas del recurso extraordinario de casación.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, cuando una de las partes en el proceso, indistintamente del tipo de controversia de la que trate la causa, goce del amparo de pobreza o acredite su arraigo en el territorio rural y la pertenencia a los niveles 1 y 2 del SISBEN, o acredite la calidad de mujer rural en los términos establecidos por el artículo 2° de la Ley 731 de 2002, se prescindirá del requisito establecido en el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012 y se privilegiará, siempre y cuando se cumplan los fines del recurso de casación, el estudio de fondo de las controversias sobre la valoración de los requisitos establecidos en el artículo 344 de la referida ley, teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es conseguir la plena realización de la justicia en el área rural, en consonancia con los fines y principios generales del derecho agrario.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO XII</b> Relatoría</p> <p><b>Artículo 108. Relatoría para las especialidades agrarias y rurales.</b> Las relatorías de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y de la Sección Primera del Consejo de Estado deberán efectuar un análisis de las decisiones proferidas en materia agraria y rural con el fin de identificar de manera clara y expresa los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El desarrollo de líneas jurisprudenciales en cada jurisdicción en materia agraria y rural;</li> <li>2. Las discrepancias interpretativas entre ambas jurisdicciones;</li> <li>3. El seguimiento a la sustanciación de casos que puedan ameritar el uso del mecanismo de avocación de competencia.</li> </ol> <p>Frente a los aspectos señalados en este artículo, ambas jurisdicciones deberán disponer de los mecanismos pertinentes para comunicar mutuamente sus hallazgos y para garantizar el acceso para consulta por parte de los ciudadanos.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO XIII</b> Acción popular y de grupo de carácter agrario y rural</p> <p><b>Artículo 109.</b> Modifíquese el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 15. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas</p>
<p>privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.</p> <p>La especialidad agraria y rural de la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones populares originadas en actos, acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, que involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.</p> <p>En los demás casos, conocerá la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria. La especialidad agraria y rural de la jurisdicción ordinaria conocerá de las acciones populares entre particulares por la violación o amenaza de los derechos e intereses colectivos que involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural, o que se refieran a relaciones económicas de naturaleza agraria.</p> <p><b>Artículo 110.</b> Modifíquese el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 16. Competencia. De las acciones populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos, los jueces agrarios y rurales administrativos, los jueces civiles de circuito y los jueces agrarios y rurales. En segunda instancia, la competencia corresponderá al Tribunal Administrativo o al Tribunal Superior de Distrito Judicial de la especialidad y jurisdicción a la que pertenezca el juez de primera instancia.</p> <p>Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda. En los asuntos agrarios y rurales se aplicarán las normas de competencia territorial establecidas en la norma especial.</p> <p><b>Artículo 111.</b> Modifíquese el artículo 50 de la Ley 472 de 1998, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.</p> <p>La especialidad agraria y rural de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas que involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia.</p> <p>La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con</p>	<p>ocasión del ejercicio de las acciones de grupo. La especialidad agraria y rural de la jurisdicción ordinaria conocerá de las acciones de grupo entre particulares, siempre que la controversia sea de carácter agrario y rural.</p> <p><b>Artículo 112.</b> Modifíquese el artículo 51 de la Ley 472 de 1998, el cual quedará así:</p> <p>Artículo 51. Competencia. De las acciones de grupo conocerán en primera instancia los jueces administrativos, los jueces agrarios y rurales administrativos, los jueces civiles de circuito y los jueces agrarios y rurales. En segunda instancia la competencia corresponderá al Tribunal Administrativo o al Tribunal del Distrito Judicial de la especialidad y jurisdicción a la que pertenezca el juez de primera instancia.</p> <p>Será competente el juez de lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante, a elección de éste. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda. En los asuntos agrarios y rurales se aplicarán las normas de competencia territorial establecidas en la norma especial.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO XIV</b> Remisiones y aspectos no regulados</p> <p><b>Artículo 113. Aspectos no regulados.</b> En los aspectos procesales no contemplados en esta ley, respecto al trámite del proceso agrario y rural que se tramita ante la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Ordinaria se seguirá el Código General del Proceso, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones contempladas en esta norma.</p> <p>En los aspectos procesales no contemplados en esta ley, respecto al trámite del proceso agrario y rural que se tramita ante la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones contempladas en esta norma, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 306 de ese estatuto.</p> <p>Contra las providencias proferidas en la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo procederán los recursos extraordinarios regulados en la Ley 1437 de 2011 en sus términos y reglas fijados, siempre que sean compatibles con la naturaleza de los procesos y actuaciones contempladas en esta ley.</p> <p>El trámite de las acciones populares y de grupo se regulará por lo dispuesto en la Ley 472 de 1998.</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO IV</b></p>

<p><b>MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ASUNTOS AGRARIOS Y RURALES</b></p> <p><b>Artículo 114. Procedencia de la conciliación.</b> Se podrán conciliar las materias de naturaleza agraria y rural que sean susceptibles de transacción, desistimiento, siempre que la ley no lo prohíba. Igualmente, ante la Procuraduría General de la Nación podrán conciliarse las pretensiones de contenido económico de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos.</p> <p>El conciliador en derecho, incluyendo el adjunto al despacho judicial, el servidor público habilitado para conciliar o el notario, deberán corroborar la procedencia de la solicitud de conciliación, de acuerdo con la naturaleza del asunto y previa acreditación de los requisitos establecidos en esta ley, y en las normas vigentes que regulan la conciliación. Para ello, los mencionados operadores podrán consultar el informe técnico jurídico elaborado por la Agencia Nacional de Tierras, así como las pruebas que obren en el expediente administrativo que se haya conformado y las que aporte el convocante con la solicitud, o alguno de los interesados ante la misma entidad.</p> <p><b>Artículo 115. Conciliación prejudicial en asuntos de índole agraria y rural.</b> La conciliación prejudicial no será requisito de procedibilidad para acudir ante los jueces agrarios y rurales.</p> <p>No obstante, sin perjuicio de la disposición del presente artículo, las autoridades nacionales y locales, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia de Nacional de Tierras o las entidades que hagan sus veces, promoverán campañas de fácil acceso a la población rural y vulnerable, orientadas a promover el uso del mecanismo de la conciliación, incluida la conciliación en equidad, y demás mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia agraria y de tierras.</p> <p><b>Artículo 116. Competencia para conciliar.</b> La conciliación relativa a asuntos de conocimiento de la Especialidad Agraria y Rural podrá adelantarse ante los siguientes operadores: (i) el juez que conozca del proceso, (ii) el conciliador adjunto al despacho judicial, (iii) los funcionarios que la Procuraduría General de la Nación designe, (iv) la Agencia Nacional de Tierras, (v) los notarios, (vi) los funcionarios que la Defensoría del Pueblo designe, (vii) los personeros municipales y distritales, y (viii) los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La Agencia Nacional de Tierras dispondrá de un equipo jurídico que, previa formación y capacitación por entidades avaladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, tenga la calidad de conciliadores en los asuntos de índole agraria y rural, de conformidad con las normas que regulan la materia.</p> <p>Los estudiantes de las Facultades de Derecho que obtengan licencia temporal para el</p>	<p>ejercicio de la profesión, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, podrán realizar su judicatura como conciliadores en asuntos agrarios al servicio de la Agencia Nacional de Tierras, la cual podrá celebrar convenios con las universidades para tal finalidad, en tanto resulten pertinentes, siempre y cuando se cumplan los requerimientos establecidos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 11 de la Ley 640 de 2001 y demás normas reglamentarias.</p> <p><b>Artículo 117. Audiencia de conciliación.</b> La audiencia de conciliación se llevará a cabo en la fecha que disponga el conciliador o en el mismo momento y lugar en donde se presente la solicitud elevada por las partes, evitando cualquier dilación para su trámite, la cual se someterá a lo señalado en el artículo 20 de la Ley 640 de 2001.</p> <p><b>Parágrafo.</b> El Gobierno Nacional reglamentará la prestación del servicio de conciliación y de los demás métodos de solución de conflictos autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por parte de los centros de conciliación y arbitraje, por fuera de su sede principal, para la solución de las controversias de naturaleza agraria y rural, con el fin de implementar lo descrito en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.</p> <p><b>Artículo 118. Aprobación judicial del Acuerdo de conciliación.</b> El acuerdo de conciliación celebrado sobre asuntos agrarios y rurales de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se remitirá al operador judicial competente para su respectiva aprobación.</p> <p><b>Artículo 119. Trámite de aprobación judicial del acuerdo conciliatorio.</b> El procedimiento de aprobación judicial de la conciliación se sujetará a las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El juez examinará el expediente y las pruebas allegadas al trámite conciliatorio. De encontrar el acuerdo conforme a derecho proferirá auto aprobatorio, dentro de los veinte (20) días siguientes a la recepción de la actuación en el despacho.</li> <li>2. El juez podrá requerir a las partes para que subsanen las deficiencias dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación o procederá a decretar las pruebas que requiera para dictar el auto.</li> <li>3. Si hubiere transcurrido el plazo señalado en el literal anterior sin que se hubieren subsanado las deficiencias, el juez dispondrá el rechazo de la solicitud de aprobación del acuerdo conciliatorio. En el evento en que se subsanen las deficiencias el juez, si lo considera, podrá decretar pruebas, en este caso el término para resolver la solicitud se ampliará por diez (10) días.</li> <li>4. Cuando se apruebe un acuerdo conciliatorio en el cual se definan derechos reales de propiedad sobre bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural, el juez agrario y rural administrativo remitirá copia de éste a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que lleve a cabo el registro correspondiente.</li> </ol>
<p><b>Artículo 120. Registro de los acuerdos de conciliación que no requieren de aprobación judicial.</b> Para el registro de los acuerdos de conciliación, las actas originales serán archivadas por los conciliadores, los centros de conciliación, las notarías y las entidades públicas que cuenten con funcionarios habilitados para conciliar en temas agrarios y rurales, de acuerdo con la norma vigente que regula la conciliación y la norma vigente en materia de archivo</p> <p><b>Artículo 121. Amigable composición.</b> En las controversias de índole agraria y rural susceptibles de conciliación procederá la amigable composición como mecanismo alternativo de solución de conflictos. La decisión del amigable componedor requerirá de aprobación judicial en las mismas condiciones que se exigen para la conciliación.</p> <p><b>Artículo 122. Otros métodos de resolución de conflictos.</b> En las controversias de índole agraria y rural susceptibles de conciliación, las partes podrán explorar diferentes mecanismos alternativos de naturaleza autocompositiva, tales como la mediación, la negociación o la facilitación a través de organizaciones comunales, campesinas, rurales, veredales o de mujeres, al igual que métodos tradicionales de solución de conflictos, cuya decisión definitiva deberá ser aprobada judicialmente, en los términos establecidos para la conciliación en la presente ley. Al recurrir a estos mecanismos deberá tenerse en cuenta el derecho propio de los pueblos y las comunidades.</p> <p>Para estos casos, las autoridades del nivel nacional y territorial deberán promover espacios de participación de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en la resolución de conflictos sobre la tenencia y uso de la tierra</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> El Gobierno Nacional promoverá y apoyará los mecanismos comunitarios y tradicionales de solución de conflictos, al igual que la participación de las mujeres y de las organizaciones de las mujeres en la resolución de conflictos sobre la propiedad, tenencia y uso de la tierra.</p> <p><b>Parágrafo 2°.</b> El Gobierno Nacional promoverá y apoyará los mecanismos alternativos de solución de conflictos propios de las comunidades étnicas del país, de conformidad con sus costumbres y cultura de arraigo ancestral.</p> <p><b>Parágrafo 3°.</b> Créase un fondo cuenta sin personería jurídica adscrito al Ministerio del Justicia y del Derecho a fin de financiar los mecanismos de resolución de conflictos asociados a los asuntos regulados en esta ley, a fin de capturar los recursos de cooperación internacional, traslados presupuestales, donaciones u otros ingresos relacionados con la promoción de estos mecanismos en áreas rurales.</p> <p><b>Artículo 123. Remisión normativa.</b> En los asuntos que no se encuentren regulados en el presente título, se aplicarán las normas vigentes en materia de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.</p>	<p><b>Artículo 124.</b> En relación con los asuntos objeto de esta ley, el Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, adelantarán las acciones necesarias para articular el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable composición del Ministerio de Justicia y del Derecho desarrollo (SICAAC) con los sistemas de información que administra el Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de registrar y llevar estadísticas de los casos, incluyendo entre otras variables: partes interesadas, tipo y asunto a conciliar, fechas y tiempos, estado de avance, localización geográfica, entidad que lleva la conciliación y decisión del caso y aquellos casos que no lograron hacer tránsito a cosa juzgada y que debieron o deben direccionarse a las respectivas instancias administrativas y/o judiciales.</p> <p style="text-align: center;"><b>TÍTULO V FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DERECHO AGRARIO Y RURAL</b></p> <p><b>Artículo 125. Formación en derecho agrario y rural.</b> Las instituciones universitarias, a través de los programas de derecho y en el marco de la autonomía universitaria, implementarán las medidas necesarias para incluir en sus currículos académicos la formación en estudios en derecho agrario y rural.</p> <p><b>Artículo 126. Judicatura en despachos judiciales agrarios y rurales.</b> Para optar el título de abogado el estudiante podrá acreditar haber prestado servicio de judicatura en despachos judiciales agrarios y rurales como auxiliar judicial o facilitador, por el tiempo y en las condiciones que señale para el efecto el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Con el propósito de incentivar las prácticas de judicatura en despachos judiciales agrarios y rurales como auxiliar judicial o facilitador, el Consejo Superior de la Judicatura estará facultado para establecer condiciones de menor tiempo de judicatura o remuneración para los judicantes que opten por dichas prácticas en zonas rurales del territorio nacional.</p> <p><b>Artículo 127. Promoción de los derechos de las mujeres rurales.</b> Las autoridades competentes territoriales y del nivel nacional, proveerán mecanismos para brindar asesoría, representación y formación especial a las mujeres rurales, para que puedan superar las barreras que les dificultan la asignación, reconocimiento y protección de sus derechos sobre la tierra.</p> <p><b>Artículo 128. Excepción a control de gastos.</b> Se exceptúa al Consejo Superior de la Judicatura durante la implementación de lo previsto en esta ley, de la aplicación de las restricciones previstas en la Ley 617 de 2000 y el artículo 51 de la Ley 1955 de 2019, en lo requerido para la puesta en funcionamiento de la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Ordinaria y la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.</p> <p><b>Artículo 129. Proceso de implementación.</b> La Especialidad Agraria y Rural de la</p>

<p>Jurisdicción Ordinaria y la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa entrarán a funcionar en un término no superior a los treinta (30) meses siguientes a la promulgación de esta ley. Su implementación será progresiva y, mientras entra en funcionamiento en todo el territorio nacional, se podrá adoptar un régimen de transición por parte del Consejo Superior de la Judicatura conforme a lo establecido en la presente Ley.</p> <p>En el proceso de implementación de la especialidad agraria y rural se priorizarán los municipios definidos en el Decreto Ley 893 de 2017, “por el cual se crean los programas de desarrollo con enfoque territorial -PDET-”, los municipios de mayor conflictividad rural y agraria en el país, así como la población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, con especial atención en los derechos de las víctimas del conflicto, de los niños y niñas, de las mujeres, y de las personas adultas mayores. Igualmente, con el propósito de garantizar la atención judicial a los ciudadanos rurales en el territorio nacional, los despachos judiciales agrarios y rurales administrativos, así como los jueces agrarios y rurales ordinarios podrán atender la competencia funcional de ambas especialidades.</p> <p>Durante este periodo el Gobierno Nacional adelantará las gestiones presupuestales y demás medidas que sean necesarias para la creación de nuevos despachos judiciales, puesta en marcha e implementación de la Especialidad Agraria y Rural en la Jurisdicción Ordinaria y de la Especialidad Agraria y Rural Administrativa en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.</p> <p>Para el efecto se autoriza al Gobierno Nacional para que durante los próximos treinta (30) meses incluya en el presupuesto de rentas y gastos una partida de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos, estableciendo según el caso recursos adicionales susceptibles de asignación a la Rama Judicial, a efectos de implementar la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Ordinaria y la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en todo el territorio nacional.</p> <p>A su vez, en este término el Consejo Superior de la Judicatura deberá elaborar un Plan para la puesta en marcha e implementación de la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción Ordinaria y la Especialidad Agraria y Rural de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, incluido el análisis financiero y de demanda, instrumento que deberá ser elaborado en coordinación con las Altas Cortes de dichas jurisdicciones.</p> <p>Adicionalmente, para la puesta en marcha de esta especialidad agraria el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñarán una estrategia pedagógica para dar a conocer esta nueva especialidad en los territorios y la posibilidad de acceder a la misma. Esta estrategia contará con un enfoque diferencial, en particular teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 126 de la presente ley, sobre mujeres rurales. Para la implementación de la estrategia las</p>	<p>entidades responsables deberán coordinar con las entidades territoriales y el Ministerio Público.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura deberá implementar un programa de formación en derecho agrario y rural dirigido especialmente a los jueces civiles municipales y a los jueces promiscuos en virtud de las nuevas competencias previstas en esta ley.</p> <p><b>Artículo 130. Provisión de cargos.</b> Para la provisión de los cargos de juez de los Juzgados Agrarios y Rurales y de magistrado de las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura dispondrá de la realización de un concurso regido bajo los principios de transparencia y mérito, conforme a las reglas señaladas en esta ley e incorporará como criterio de valoración el conocimiento de la normativa en materia agraria, ambiental y en las normas que desarrollan el proceso judicial agrario y rural.</p> <p>El Consejo Superior de la Judicatura deberá convocar al concurso de méritos de que trata el parágrafo anterior dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, fijando un cronograma que permita culminar el concurso y proveer los cargos por el sistema de carrera en un plazo no mayor a 3 años. No obstante, lo anterior, los cargos judiciales actualmente sometidos a concurso de méritos, así como los aspirantes a jueces y magistrados que se hallen registrados en la lista de elegibles actual para despachos civiles deberán destinarse prioritariamente a satisfacer la oferta judicial de jueces y magistrados rurales y agrarios, para lo cual, los funcionarios deberán ser capacitados en materia de derecho agrario, ambiental y demás normas pertinentes, previo a la posesión en su cargo.</p> <p>Para efectos de lograr la cobertura de las zonas priorizadas para la implementación del Acuerdo Final de Paz, la provisión de los cargos de juez y magistrado en estos despachos podrá realizarse en provisionalidad, hasta tanto se surta el respectivo concurso y se provea el cargo en propiedad, de acuerdo con las listas respectivas. No obstante, para posesionarse y ejercer los cargos de juez y magistrado deberán tomar y aprobar, con dedicación exclusiva, el curso de capacitación en la normatividad agraria y ambiental, y en el procedimiento judicial agrario y rural regulado en esta ley, de acuerdo con el plan que para tal fin diseñe e implemente la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, cuyo diseño deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta Ley.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Para ser nombrado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se deberá acreditar la condición de residente permanente o poseer la tarjeta de residencia temporal por actividad laborales.</p> <p><b>Artículo 131. Facultades extraordinarias.</b> De conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístase al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley, para expedir por medio de decretos con fuerza de ley, la regulación del acceso</p>
<p>a la justicia en asuntos agrarios y rurales para los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en particular respecto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Crear el marco jurídico que permita establecer la definición de los conflictos de competencia y la articulación entre las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, y la jurisdicción especial indígena.</li> <li>2.- Establecer los mecanismos diferenciales para remover las barreras de acceso a la justicia por parte de los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.</li> <li>3.- Fijar los instrumentos normativos necesarios para permitir la operatividad de la especialidad agraria y rural en controversias sobre territorios colectivos.</li> </ol> <p>La definición y adopción del marco normativo al que se refiere este artículo deberá ser consultada por el Gobierno Nacional a los pueblos étnicos a través de las autoridades y organizaciones representativas bajo los parámetros de la jurisprudencia constitucional, la ley y el derecho propio, con el fin de dar cabal cumplimiento al derecho fundamental de la consulta previa. La metodología de la consulta previa será concertada entre el Gobierno Nacional y los pueblos étnicos a través de las autoridades y organizaciones representativas.</p> <p><b>Artículo 132.</b> Se exhorta al Gobierno Nacional a presentar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de la presente ley, un proyecto de ley de reforma de la ley estatutaria de la administración de justicia que se ocupe de la solución de las controversias ambientales que se presentan en el territorio nacional, a través de la creación de una especialidad agraria y ambiental en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contenciosa administrativa.</p> <p><b>Artículo 133. Modalidad de servicio móvil de atención al ciudadano con enfoque en lo rural y agrario.</b> El Ministerio de Justicia y del Derecho en coordinación con las autoridades nacionales y locales competentes en la materia desarrollarán por lo menos cada seis (6) meses, una modalidad de servicio móvil de atención al ciudadano con enfoque en lo rural y agrario, orientada a facilitar información sobre derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural, con el fin de facilitar el acceso a los servicios y trámites a que hace referencia la presente ley. Asimismo, en esta modalidad se podrá promover y desarrollar mecanismos alternativos de solución de conflictos.</p> <p><b>Artículo 134. Régimen de transición y vigencia.</b> Esta ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación y solo se aplicará a los procesos cuyas demandas se instauran con posterioridad a su entrada en vigor.</p> <p>Las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.</p>	<p>Si a la entrada en vigencia de esta ley, no hubieren empezado a funcionar los jueces agrarios y rurales de ambas especialidades, serán competentes para conocer las demandas sobre estos asuntos, conforme al régimen jurídico de competencias anterior, los jueces promiscuos, los jueces municipales, los jueces civiles del circuito, los jueces administrativos, las Salas Civiles de los Tribunales Superiores del Distrito, los Tribunales Administrativos, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Sección Primera del Consejo de Estado.</p> <p>Las anteriores reglas de competencia se mantendrán hasta la decisión judicial que cierre cada proceso; por lo tanto, los asuntos iniciados con anterioridad a su creación, no se trasladarán a los jueces y magistrados rurales y agrarios.</p> <p><b>Parágrafo 1º.</b> Los siguientes procesos serán enviados a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el estado en que se encuentren, incluso si hubieran entrado al despacho para fallo. Estos procesos se resolverán de acuerdo con las normas que los regulaban con anterioridad a la vigencia de la presente ley:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</li> <li>2. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.</li> <li>3. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o de la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.</li> </ol> <p><b>Parágrafo 2º.</b> Los procesos judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se podrán acumular a los iniciados con posterioridad a ella, conforme al proceso establecido en esta ley, aunque el trámite sea distinto.</p> <p><b>Artículo 135. Derogatorias y modificaciones.</b> La presente ley deroga, a partir de su vigencia, las siguientes expresiones de la Ley 1564 de 2012: “incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria” en el numeral 1º del artículo 20; “agrario” en el numeral 8º del artículo 30; “agrario” en el inciso primero del artículo 618.</p> <p>Por otra parte, deroga, a partir de su vigencia, el inciso quinto del numeral 2 del artículo 33; los numerales 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 del artículo 33 de la Ley 160 de 1994. Así mismo, deroga los numerales 10 y 11 del artículo 152; el numeral 5º del artículo 156; los literales “e”, “f” y “g” del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Igualmente, deroga el numeral 8 del artículo 390 de la Ley 1564 de 2012.</p>



El artículo 399 de la Ley 1564 de 2012 no se aplicará en los procesos de expropiación sobre bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural, salvo lo relativo al numeral 4 de dicha disposición alusivo a la entrega anticipada del bien, la cual aplicará en el marco del proceso previsto en esta ley.

Las expresiones alusivas en la Ley 160 de 1994 a los Tribunales Administrativos o al Consejo de Estado, deberán entenderse, conforme a las competencias señaladas en la presente ley, a los Jueces Agrarios y Rurales, a los Jueces Agrarios y Rurales Administrativos, a las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a las Salas Agrarias y Rurales de los Tribunales Administrativos, a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia y a la Sección Primera Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, según corresponda.

Cordialmente,

**Juanita Goebertus Estrada**  
Representante a la Cámara  
Bogotá D.C

**Angélica Lozano Correa**  
Senadora de la República

**José Daniel López**  
Representante a la Cámara  
Bogotá D.C

**Rodrigo Lara Restrepo**  
Senador de la República

**Roosevelt Rodríguez Rengifo**  
Senador de la República

**Adriana Magali Matiz Vargas**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Tolima

**CARLOS ARDILA ESPINOSA**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Putumayo

**Luis Fernando Velasco**  
Senador de la República

**Julio César Triana Quintero**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila

**Ángela María Robledo Gómez**  
Representante a la Cámara

**Jorge Alberto Gómez Gallego**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Antioquia

**Juan Carlos Lozada Vargas**  
Representante a la Cámara  
Bogotá D.C

**Alfredo Deluque**  
Representante a la Cámara  
Departamento de La Guajira


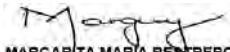




# PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA

## PROYECTO DE LEY ORGÁNICA NÚMERO 141 DE 2021 CÁMARA

*por medio de la cual se dictan disposiciones para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se dictan otras disposiciones.*

<p style="text-align: center;">PROYECTO DE LEY ORGANICA No _____ DE 2021</p> <p style="text-align: center;"><b>“POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DE MEDELLÍN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”</b></p> <p style="text-align: center;">EL CONGRESO DE COLOMBIA</p> <p style="text-align: center;">DECRETA:</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO I</p> <p style="text-align: center;"><b>PRINCIPIOS GENERALES Y ORGANIZACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO</b></p> <p><b>Artículo 1°. Objeto.</b> La presente ley orgánica tiene por objeto la asignación de competencias, facultades, instrumentos y recursos normativos al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de promover su desarrollo integral y establecer su régimen político, administrativo y fiscal.</p> <p><b>Artículo 2°. Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.</b> De conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo N° 01 de 2021 y los artículos 328 y 356 de la Constitución Política, la ciudad de Medellín, Capital del Departamento de Antioquia se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y goza de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la presente ley.</p> <p><b>Artículo 3°. Régimen aplicable.</b> El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín será una entidad territorial autónoma, sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que establece expresamente la Constitución, la presente Ley, y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten.</p> <p>Las disposiciones generales de la Ley 1617 de 2013, solo serán aplicables en la medida en que la autoridad administrativa Distrital y el Concejo Distrital así lo consideren, no estará obligada a efectuar ajustes administrativos que generen mayores costos para la ciudad.</p>	<p>En lo no dispuesto en la anterior normatividad, se someterá a la legislación vigente para los municipios.</p> <p>La Personería municipal y la Contraloría municipal se transformaran en Personería Distrital y Contraloría Distrital.</p> <p><b>Artículo 4°. División Político, territorial, administrativa y jurisdicción del Distrito:</b> El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, mantendrá la actual división político administrativa de su jurisdicción compuesta por Comunas y Corregimientos, en tal sentido, no estará obligado a la revisión de sus actuales límites territoriales.</p> <p>La Administración Distrital y el Concejo Distrital, previo análisis financiero, político y territorial podrá implementar la transformación político-administrativa del territorio mediante la creación de nuevas comunas o la fusión de algunas.</p> <p><b>Artículo 5°. Autoridades del Distrito:</b> La administración del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín estará en cabeza de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Concejo Distrital.</li> <li>2. El Alcalde Distrital.</li> <li>3. Las Juntas Administradoras Locales.</li> <li>4. Las entidades que el Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Distrital, cree y organice y,</li> <li>5. El Organismo Rector de la Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital.</li> </ol> <p><b>Artículo 6°. Continuidad en la Delegación de Funciones:</b> El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mantendrá la delegación de funciones en materia ambiental, transporte, catastral, hechos metropolitanos, predial, movilidad y educativa entre otros, en los organismos y entidades que las vienen desempeñando, a pesar de ser autoridad y gozar de autonomía de dichas funciones.</p> <p>Las nuevas atribuciones y competencias que consagra la presente ley, se refieren exclusivamente a crear y reglamentar funciones en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Distrito Especial de Medellín.</p>
<p><b>Artículo 7°. Facultades para el Desarrollo del Distrito Especial:</b> El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín tendrá las siguientes facultades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participar como Distrito Especial en la formulación de la Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y en la elaboración de los Planes Nacionales y Regionales de Ciencia Tecnología e Innovación;</li> <li>2. Establecer acuerdos de asociación con los demás Distritos Especiales para la aplicación de beneficios arancelarios y tributarios relacionados con actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación e implantación de industrias de base tecnológica;</li> <li>3. Establecer alianzas y asociaciones público - privadas para el desarrollo de su vocación en Ciencia, Tecnología e Innovación;</li> <li>4. Potenciar la construcción de ecosistemas tecnológicos, por medio de la adecuación del territorio para el aprovechamiento de las oportunidades en Ciencia, Tecnología e Innovación;</li> <li>5. Crear el Organismo Rector de la Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital, como cuerpo asesor de la política distrital de ciencia, tecnología, innovación.</li> </ol> <p style="text-align: center;">TÍTULO II</p> <p style="text-align: center;"><b>FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO</b></p> <p style="text-align: center;">Capítulo I</p> <p style="text-align: center;"><b>El Concejo Distrital</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Organización y Funcionamiento</b></p> <p><b>Artículo 8°. Funciones generales.</b> El Concejo Distrital es la máxima autoridad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Sus atribuciones, funciones, materias, competencias y composición corresponden a lo reglado en Constitución y la Ley.</p> <p><b>Artículo 9°. Atribuciones Especiales en Ciencia, Tecnología e Innovación.</b> Adicional a las atribuciones que la Constitución y la Ley otorga a los concejos, el Concejo Distrital ejercerá las siguientes atribuciones especiales:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobar el Plan de Desarrollo asegurando la existencia y financiación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital.</li> <li>2. Aprobar el plan de inversiones que hace parte del Plan General de Desarrollo, con los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y asegurar los recursos del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital y la independencia del Organismo Rector</li> <li>3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo para los planes, programas y proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>4. Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial en el marco legal existente, haciendo énfasis en el desarrollo de infraestructuras, amoblamiento y estructura del territorio para la Ciencia, Tecnología y la Innovación Distrital. Con tal fin, dictará las normas que demanden los procesos de renovación urbana, urbanización y parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano, definirá los polígonos que se constituyen como distritos asociados a ciencia, tecnología e innovación, e incentivará los usos de infraestructura para el mismo fin.</li> <li>5. Dictar las normas necesarias para desarrollar programas e iniciativas en favor del alcance de los objetivos de desarrollo sostenible utilizando la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como base para ello.</li> <li>6. Revisar el plan decenal de Ciencia, Tecnología e Innovación cada 4 (cuatro) años.</li> <li>7. Designar a su representante en el Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>8. Aprobar las transformaciones del sistema de educación público distrital necesarias para desarrollar el talento humano que requieren los planes de ciencia, tecnología e innovación.</li> </ol>

<p>9. Realizar seguimiento a la implementación del sistema de Ciencia Tecnología e Innovación que realice el Alcalde Distrital y el Organismo Rector.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo II Alcalde Distrital</b></p> <p><b>Artículo 10°. Funciones Generales.</b> El Alcalde Distrital, es el jefe del gobierno y de la administración Distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito. Sus atribuciones, funciones y competencias corresponden a lo reglado en Constitución y la Ley.</p> <p><b>Artículo 11°. Atribuciones Especiales del Alcalde Distrital en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.</b> Además de las funciones asignadas en la Constitución, la Ley y los acuerdos expedidos por el Concejo, al Alcalde Distrital le corresponde ejercer las siguientes atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tomar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital y la autonomía del Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital</li> <li>2. Formular y realizar la distribución y asignación de recursos relacionados con la Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>3. Distribuir los asuntos según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos, las entidades descentralizadas y el Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>4. Coordinar y vigilar las funciones que ejerzan y los servicios que presten en el Distrito las entidades nacionales y departamentales, en las condiciones de la delegación que le confiera la presidencia de la República y la gobernación de Antioquia, relacionadas con Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Formular y presentar al Concejo Distrital los proyectos de acuerdo sobre la estructuración y desarrollo del Sistema de Ciencia, Tecnología e innovación Distrital.</li> <li>6. Presentar cada 4 Años el Plan del Sistema Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación, y anualmente al Concejo los avances en coordinación con el Organismo Rector de Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>7. Presidir o designar a quien presidirá el Organismo Rector de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo III Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital</b></p> <p><b>Artículo 12°. Del Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital:</b> El Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación será la máxima autoridad del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital y coordinará su acción con las políticas nacionales, departamentales, metropolitanas y distritales.</p> <p><b>Artículo 13°. Composición del Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital.</b> El Organismo Rector del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación Distrital estará integrado por quince (15) miembros así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcalde Distrital o su delegado, quién lo presidirá.</li> <li>• El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, o su delegado.</li> <li>• El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado.</li> <li>• Un Representante del Concejo Distrital o su delegado.</li> <li>• Un Rector de las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas, con reconocida trayectoria en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, elegido por ellas, cuando tengan presencia en el departamento o Distrito.</li> <li>• Un Rector de las Instituciones de Educación Superior (IES) Privadas, con reconocida trayectoria en el desarrollo científico, tecnológico y de</li> </ul>
<p>innovación, elegido por ellas, cuando tengan presencia en el departamento o Distrito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Director de Ruta N, o su delegado.</li> <li>• Un representante de las agencias públicas de fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación del orden departamental, elegido por ellas mismas, cuando tengan presencia en el departamento.</li> <li>• Un representante de las agencias públicas de fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación del orden Distrital, elegido por ellas mismas, cuando tengan presencia en el Distrito.</li> <li>• Un representante del Comité Universidad - Empresa - Estado (CUEE) del Distrito Especial de Medellín.</li> <li>• Un representante del Consejo Territorial de Planeación Medellín.</li> <li>• Un representante de ACOPI Antioquia.</li> <li>• Un representante de Pro Antioquia.</li> <li>• Un representante de la Comisión Regional de Competitividad.</li> <li>• Un representante del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología CODECTI.</li> </ul> <p><b>PARÁGRAFO PRIMERO:</b> Se designará un representante adicional por cada municipio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que se adhiera a los beneficios del Distrito Especial. Podrán replicarse Organismos del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en cada uno de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuando se acojan a los beneficios del Distrito Especial, momento en el cual existirán fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital y en cada uno de los municipios beneficiarios.</p> <p><b>PARÁGRAFO SEGUNDO:</b> Los integrantes del Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito que deban ser elegidos, ejercerán sus funciones durante un periodo de dos años, contados a partir de la primera sesión a la que fueron citados.</p> <p><b>Artículo 14°. Funciones.</b> Las funciones del Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asesorar al Gobierno Distrital en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Orientar y definir la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital y darle seguimiento a su Plan de Acción; la política tendrá un marco temporal de 10 años con revisiones periódicas cada 4 años.</li> <li>3. Conceptuar sobre el nivel de financiamiento, instrumentos y evaluación de resultados del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco del Plan de Desarrollo.</li> <li>4. Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital, con los demás órganos de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.</li> <li>5. Crear y fomentar la construcción de espacios para trabajar de forma coordinada con los demás actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>6. Administrar y reglamentar el Fondo Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación que trata el artículo 18 de la presente Ley.</li> <li>7. Recomendar la creación de nuevas entidades que sean necesarias para ejecutar la política Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación.</li> <li>8. Darse su propio reglamento.</li> </ol> <p><b>PARÁGRAFO:</b> La Administración Distrital destinará los recursos económicos y humanos necesarios para el correcto funcionamiento de este Órgano Rector. El órgano rector presentará un presupuesto anual con los recursos necesarios para su operación.</p> <p><b>Artículo 15°. Secretaria Técnica:</b> El Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá una Secretaría Técnica, encargada de la organización y desarrollo de las sesiones. Esta función será realizada por la Alcaldía Distrital o por quien ellos designen para tal efecto.</p> <p><b>Artículo 16°. Funciones:</b> Son funciones de la Secretaria Técnica, entre otras que designe el Organismo Rector las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocar las sesiones;</li> <li>• Levantar actas de las sesiones y mantener actualizada la documentación;</li> <li>• Emitir las comunicaciones internas necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones del organismo;</li> <li>• Entregar a los miembros y participantes de la sesión del organismo, la información que se requiere para la reunión;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Llevar el consecutivo de las actas de las reuniones, debidamente firmadas y con los soportes a que haya lugar, que deberán reposar en el archivo documental y digital del organismo;</li> <li>Coordinar el proceso de elección de los miembros del organismo que defina esta norma.</li> <li>Las demás asignadas por el Organismo Rector o el reglamento.</li> </ul> <p><b>Artículo 17°. Entidades que sirven de Organismos ejecutores del plan de acción del sistema.</b> Los Organismos ejecutores del plan de acción del Sistema de Ciencia, Tecnología e innovación del Distrito de Medellín podrán ser las entidades que realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación tanto públicas como privadas dentro del Distrito.</p> <p style="text-align: center;"><b>Título III</b> <b>Del Sistema de Ciencia tecnología e Innovación Distrital</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo I</b> <b>Financiación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación</b></p> <p><b>Artículo 18°. Financiación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación:</b> Para la financiación de la Política Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Distrito Especial y los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que se acojan a los beneficios, destinarán por lo menos el 5% del presupuesto de inversión para su cumplimiento y se destinará adicionalmente un 5% del impuesto de industria y comercio para financiar proyectos y programas en el marco de la Política Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p>Con estos recursos se constituirá el Fondo Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya política y mecanismos de inversión serán definidos por el Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrital al que se refiere el artículo 12 de la presente ley.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMERO:</b> Autorizar a las entidades del orden nacional a aportar recursos económicos al Fondo Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para la ejecución de programas y proyectos de interés científico, tecnológico y de innovación para el distrito.</p>	<p><b>PARÁGRAFO SEGUNDO:</b> Autorizar al Fondo Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para recibir recursos económicos públicos o privados, de cooperación internacional, donaciones u otras modalidades, para la financiación de programas y proyectos de interés científico, tecnológico y de innovación para el Distrito.</p> <p><b>Artículo 19°. Financiación entidades de naturaleza pública:</b> La Administración Distrital previo concepto favorable de la Secretaría de Hacienda Distrital, garantizará el presupuesto para la operación y ejecución de los proyectos de las entidades de naturaleza pública existentes para la ejecución de la política pública de ciencia, tecnología e innovación distrital.</p> <p><b>Artículo 20°. Compra Pública Innovadora:</b> La Administración Distrital deberá crear una política y mecanismos de implementación, para un programa de compra pública innovadora.</p> <p><b>Artículo 21°. Establecer, reformar o eliminar tributos específicos para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Distrito (Estampilla Pro Innovación):</b> El Concejo Distrital por iniciativa del Alcalde Distrital, podrá crear, reformar o eliminar tributos específicos para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, tales como la creación de la Estampilla Pro Innovación, entre otros.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo II</b> <b>Programas de promoción y desarrollo del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</b></p> <p><b>Artículo 22°. Obras por Impuestos:</b> Se aplicará el mecanismo de Obras por impuestos o Innovación por impuestos en el Distrito Especial, mediante el cual los contribuyentes pueden aportar al desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito, a través de la ejecución de proyectos de impacto económico y social.</p> <p>El mecanismo de Innovación u Obras por impuestos podrá financiar los proyectos de inversión viabilizados y registrados en el banco de proyectos del Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito, propuestos por los contribuyentes y las entidades públicas de cualquier nivel.</p>
<p>El Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, el Alcalde Distrital y el Concejo Distrital, viabilizaran y reglamentaran el Programa de obras o innovación por Impuestos.</p> <p><b>Artículo 23°. Zona Franca de Innovación y Tecnología:</b> La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Distrital, previo concepto sobre su viabilidad fiscal, crearán la Zona Franca de Innovación y Tecnología, la cual tendrá como objetivo fortalecer a través de los laboratorios de innovación, la demostración de tecnologías emergentes, asesoría y consultoría especializada, servicios de investigación y prospectiva en Ciencia, Tecnología e Innovación para el Distrito.</p> <p><b>Artículo 24°. Oficina Seccional de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio:</b> La Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC, establecerá una oficina seccional en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el objetivo de brindar mayor agilidad en los procesos de solicitud de registro de marcas, solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, solicitudes de diseños Industriales, el registro de esquemas de trazados de circuitos integrados, entre otros, e igualmente para el fomento a la protección a la innovación y la transferencia de conocimiento, la cual lleva a cabo a través del desarrollo actividades de orientación y divulgación de la Propiedad Industrial.</p> <p><b>Artículo 25°. Mecanismos Alternativos de Financiación (Crowdfunding):</b> El Organismo Rector del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito, incluirá dentro de sus políticas y programas el fomento y la utilización de los mecanismos alternativos de financiación para la Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p><b>Artículo 26°. Educación.</b> El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en conjunto con el Ministerio de Educación definirán la estructura y lineamientos pedagógicos y metodológicos en el sistema de educación distrital, con el ánimo de promover conocimientos en Ciencia, Tecnología e Innovación, para la interacción entre el sector académico, educativo y empresarial de la región.</p> <p><b>Artículo 27°. Extensión de beneficios a los Municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá:</b> Los beneficios establecidos en la presente ley al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, podrán extenderse a los municipios que forman parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,</p>	<p>Estos municipios deberán realizar su manifestación mediante la expedición de un acuerdo municipal presentado por iniciativa del Alcalde municipal, al Organismo Rector del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación Distrital, quien definirá los mecanismos de aporte, vinculación y beneficios de lo establecido en la presente ley.</p> <p><b>Artículo 28° Régimen de transición y ajustes administrativos:</b> El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín contará con un plazo de dos (2) años a partir de la promulgación de esta ley para asumir las nuevas funciones acordes con su naturaleza. Para tal fin la Alcaldía Distrital formulará en el término de 12 meses un plan de transición.</p> <p><b>Artículo 29°. Vigencia:</b> La presente Ley rige a partir de su publicación.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <b>SANTIAGO VALENCIA GONZÁLEZ</b>              Senador de la República         </div> <div style="text-align: center;">   <b>MARGARITA MARÍA RESTREPO ARANGO</b>              REPRESENTANTE A LA CÁMARA              ANTIOQUIA         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <b>JHON JAIRO BERRIO LOPEZ</b>              Reopresentante a la Cámara         </div> <div style="text-align: center;">   <b>IVÁN DARÍO ACUDEO ZAPATA</b>              Senador              Senado de la República         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <b>JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ</b>              Senador de la República         </div> <div style="text-align: center;">   <b>GERMÁN BLANCO ÁLVAREZ</b>              Representante a la Cámara – Antioquia         </div> </div>





**César Eugenio Martínez Restrepo**  
Representante a la Cámara por Antioquia



**OSCAR DARIO PÉREZ PINEDA**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Centro Democrático



**Juan Espinal**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Centro Democrático



**Paola Holguín**  
Senadora de la República  
Partido Centro Democrático



**JOSE OBDULIO GAVIRIA**  
Senador de la República



**Mauricio Parodi Díaz**  
Representante a la Cámara



**NICOLAS PEREZ VASQUEZ**  
Senador de la República




**JOHN JAIRO BÉRMUDEZ GARCÉS**  
Representante a la Cámara



**JUAN FÉLYPE LEMOS URIBE**  
Senador de la República



**CIRO ALEJANDRO RAMIREZ**  
Senador de la República



**PALOMA VALENCIA LASERNA**  
Senadora de la República



**OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander  
Partido Centro Democrático



**FERNANDO NICOLAS ARAUJO**  
Senador de la República  
Partido Centro Democrático



**GABRIEL VELASCO**  
Senador de la República



**MARIA FERNANDA CABAL MOLINA**  
Senadora de la República de Colombia

**PROYECTO DE LEY ORGANICA No \_\_\_\_\_ DE 2021**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DE MEDELLÍN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**I. ANTECEDENTES:**

El presente Proyecto de Ley Orgánica, surge tras la aprobación del Acto Legislativo No. 01 de 2021 del pasado 14 de julio "POR EL CUAL SE OTORGA LA CALIDAD DE DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Dicho Acto Legislativo fue presentado al Congreso de la República el día 20 de julio de 2020 por los Honorables Senadores Álvaro Uribe Vélez, Ruby Helena Chagüi Spath, Paola Andrea Holguín, Nicolás Pérez Vásquez, Amanda Rocío González, María Del Rosario Guerra De La Espriella, Ernesto Macías Tovar, Fernando Nicolás Araujo Rumie, Carlos Manuel Meisel, Ciro Alejandro Ramírez, José Obdulio Gaviria, Santiago Valencia González, John Harold Suarez, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, Gabriel Jaime Velasco Ocampo, Carlos Felipe Mejía Mejía, Alejandro Corrales Escobar, Paloma Susana Valencia Laserna, Y Los Honorables Representantes Yenica Acosta, Juan Manuel Daza Oscar Darío Perez, José Jaime Uscategui Esteban Quintero, Juan Fernando Espinal, Enrique Cabrales Baquero, John Jairo Berrio, Héctor Ángel Ortiz, Cesar Eugenio Martínez, Luis Fernando Gómez, Jhon Jairo Bermudez, Margarita Restrepo, Jairo Cristancho, José Vicente Carreño, Juan David Vélez, Edward David Rodríguez, Rubén Darío Molano, Hernán Garzón, Milton Hugo Angulo, Álvaro Hernán Prada, Gustavo Londoño, Jennifer Kristin Arias, Juan Pablo Celis, Gabriel Jaime Vallejo, Oscar Villamizar, Ricardo Ferro.

Los ponentes de la iniciativa fueron: en Senado el Senador Santiago Valencia González, y en Cámara la Representante Margarita Restrepo, a pesar de que el Proyecto de Acto Legislativo fue iniciativa de la Bancada del Partido Centro Democrático, **lo cierto fue que generó un gran acuerdo político y todas las**

*bancadas con asiento en el Congreso apoyaron firmemente la iniciativa, y finalmente, tras ser discutido, votado y aprobado en la Legislatura 2020-2021, con las mayorías requeridas por la Constitución y la Ley fue promulgado. Por esta razón hoy nos ocupa empezar la reglamentación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.*

**ACTO LEGISLATIVO**  
No. 01 **14 JUL 2021**

**POR EL CUAL SE OTORGA LA CALIDAD DE DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION A LA CIUDAD DE MEDELLIN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**

**EL CONGRESO DE LA REPUBLICA**

**DECRETA.**

**Artículo 1°. Adiciónese el siguiente inciso y párrafo al artículo 356 de la Constitución Política:**

La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su régimen político y fiscal será el previsto en la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten.

**Parágrafo:** La ciudad de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos. La Ley podrá crear mecanismos aplicables a los casos que fomenten y promuevan desarrollos en ciencia, tecnología e innovación.

**Artículo 2°. Adiciónese el siguiente inciso y párrafo al artículo 388 de la Constitución Política:**

La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

**Parágrafo:** Los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que así lo consideren, podrán asociarse a los municipios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de conformidad con la Ley que lo reglamente. No obstante, se garantizará la continuidad de las funciones y competencias que residen en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

**Artículo 3°. Las normas especiales que se dicten con ocasión del presente Acto Legislativo sobre régimen político, administrativo y fiscal se aplicarán a los demás Distritos Especiales que así lo consideren.**

**Artículo 4°. Vigencia.** Este Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

<p style="text-align: center;"><b>2. OBJETO</b></p> <p>El presente Proyecto de Ley orgánica, surge como medida para iniciar la reglamentación del Acto Legislativo 01 de 2021, "POR EL CUAL SE OTORGA LA CALIDAD DE DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"., en este sentido, tiene por objeto la asignación de competencias, facultades, instrumentos y dotar de recursos normativos al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de promover su desarrollo integral y establecer su régimen político, administrativo y fiscal, enfocado en Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p style="text-align: center;"><b>3. MARCO NORMATIVO</b></p> <p><b>Acto Legislativo 01 de 2021:</b> que consagró: "Artículo 1°. Adiciónese el siguiente inciso y parágrafo al artículo 356 de la Constitución Política:</p> <p><i>La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su régimen político y fiscal será el previsto en la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten.</i></p> <p><b>Parágrafo:</b> La ciudad de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos. La Ley podrá crear mecanismos adicionales a los existentes que fomenten y promuevan desarrollos en ciencia, tecnología e innovación.</p> <p>Artículo 2°. Adiciónese el siguiente inciso y parágrafo al artículo 328 de la Constitución Política:</p> <p><i>La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.</i></p> <p><b>Parágrafo:</b> Los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que así lo consideren, podrán acceder a los beneficios del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, de conformidad con la Ley que lo</p>	<p><i>reglamente. No obstante, se garantizará la continuidad de las funciones y competencias que residen en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.</i></p> <p>Artículo 3°. Las normas especiales que se expidan con ocasión del presente Acto Legislativo sobre régimen político, administrativo y fiscal se aplicarán a los demás Distritos Especiales que así lo consideren.</p> <p><b>Constitución Política de Colombia:</b> El artículo 1° de la Constitución Política establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.</p> <p>En el artículo 286 describe que "Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas".</p> <p>El artículo 287 refiere que "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley".</p> <p>El artículo 356 de la Constitución Política modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo 1 de 2001 establece que: Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios. Los Distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos para efectos de la distribución del Sistema General de Participaciones que establezca la ley.</p> <p>Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. Así mismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre y cuando estos no se hayan constituido en entidad territorial indígena.</p> <p>Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y</p>
<p>saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.</p> <p>Teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios. La ley reglamentará los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos, y Municipios, de acuerdo con las competencias que le asigne a cada una de estas entidades; y contendrá las disposiciones necesarias para poner en operación el Sistema General de Participaciones de estas, incorporando principios sobre distribución que tengan en cuenta los siguientes criterios:</p> <p>a) Para educación, salud y agua potable y saneamiento básico: población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. En la distribución por entidad territorial de cada uno de los componentes del Sistema General de Participaciones, se dará prioridad a factores que favorezcan a la población pobre, en los términos que establezca la ley.</p> <p>b) Para otros sectores: población, reparto entre población y urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y pobreza relativa. No se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas.</p> <p>Los recursos del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos, y Municipios se distribuirán por sectores que defina la ley. El monto de recursos que se asigne para los sectores de salud y educación, no podrá ser inferior al que se transfería a la expedición del presente acto legislativo a cada uno de estos sectores. Las ciudades de Buenaventura y Tumaco se organizan como Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y Ecoturísticos.</p> <p>Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución y las leyes especiales, que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas, las normas vigentes para los municipios.</p>	<p>El Gobierno nacional definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, para asegurar el cumplimiento de metas de cobertura y calidad. Esta estrategia deberá fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de cuentas.</p> <p>Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno nacional, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente acto legislativo, regulará, entre otros aspectos, lo pertinente para definir los eventos en los cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar.</p> <p>Parágrafo transitorio. El Gobierno deberá presentar el proyecto de ley que regule la organización y funcionamiento del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos, y Municipios, a más tardar el primer mes de sesiones del próximo período legislativo.</p> <p><b>La Ley 1454 de 2011</b> "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre Ordenamiento Territorial y se modifican otras disposiciones", en su capítulo III, establece la distribución de competencias en materia de ordenamiento territorial.</p> <p>El artículo 29 establece que una entidad territorial al convertirse en distrito especial será competente para dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas, así como también dirigir las demás actividades que por su carácter y denominación les corresponda.</p> <p>PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los distritos conformados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán sometiéndose a sus respectivas normas de creación. Los municipios que hayan iniciado el trámite para convertirse en Distritos antes del 30 de abril de 2019, seguirán rigiéndose por las normas constitucionales o legales con que iniciaron.</p> <p style="text-align: center;"><b>4. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA</b></p> <p><b>Medellín Distrito:</b></p>

<p>La ciudad de Medellín se ha venido consolidando en un epicentro de la ciencia, tecnología e innovación en el contexto nacional y de América Latina. De tal suerte y, en cabeza de las administraciones de la ciudad, en asocio con sectores académicos, empresariales y sociales, se ha trazado una ruta que permite posicionar a la capital de Antioquia como un referente en los desarrollos de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, así como las nuevas tecnologías, la ciencia y la innovación.</p> <p>La ciudad de Medellín ha incorporado de manera acertada la estrategia de distintos ecosistemas de innovación que concentran a instituciones, emprendedores, sectores de la academia, en una apuesta por la economía del conocimiento como un factor generador de valor agregado y desarrollo para Medellín y Antioquia; según datos de la Cámara de Comercio, Medellín cuenta con más de 1.690 empresas u organizaciones que componen un ecosistema de economía creativa, de las cuales, 99% son micro y pequeñas empresas.</p> <p>La ciencia, la tecnología y la innovación, son un mecanismo para la transformación social y económica de la región; la creación de conocimiento es un factor y un componente que refuerza el desarrollo y los indicadores que dinamizan la competitividad para la ciudad de Medellín. Es así que la capital de Antioquia se ha consolidado como el centro de la innovación en Colombia, y una de las ciudades con mejor desempeño económico en América Latina.</p> <p>Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por cada peso invertido en emprendimiento se estima que 6 pesos retornan a la economía en formalidad, empleo y crecimiento. "En 2014, la ciudad de Medellín hacía inversiones de 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en este rubro en donde un 70% venía del sector público y solo 30% del privado. Pero, tras la firma del pacto por la innovación, se fijó la meta que consistía en que, para 2018, se deberían invertir 2 puntos del PIB en actividades de ciencia, tecnología y emprendimiento" (...)</p> <p>Se presupuestó que para el año 2021 se invertirá el 3 % del PIB en emprendimiento e innovación, lo que da cuenta de la priorización del modelo económico y de desarrollo de la ciudad de Medellín, lo que tiene como consecuencia, que por vía del presente proyecto de acto legislativo, se generen mejores condiciones institucionales y normativas para permitir al ente territorial convertirse en Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y de esa manera, afianzar la vocación económica y desarrollo para la región.</p>	<p>La ciudad de Medellín ha dirigido gran parte de sus esfuerzos a la consolidación institucional, siendo ejemplo para Colombia en el manejo de los recursos públicos. Lo anterior, ha tenido como consecuencia que se haya fijado como prioridad la consolidación de un modelo de ciudad que apuesta por la vanguardia en el desarrollo económico sustentado en las nuevas tecnologías y las economías creativas.</p> <p>Empresas Públicas de Medellín es un gran dinamizador de procesos de innovación, siendo la empresa insignia de los Medellínenses, es el socio por excelencia de los desarrolladores creativos quienes hoy tienen la posibilidad de ampliar sus conocimientos aplicados a nuevos aspectos.</p> <p>Según el informe final "Concepto sobre la conveniencia de convertir a Medellín en un distrito" elaborado por la universidad EAFIT en el año 2016, arroja entre otras conclusiones que, "Como Distrito Especial, Medellín atraería mayor inversión extranjera y convertiría en más productivos sectores como el de la medicina y odontología, el textil (confección, diseño y moda), el de energía eléctrica, el de la construcción, el de turismo de negocios y el de las TIC (Tecnología, Información y Comunicaciones), todos representados por clusters que ya consolidó la ciudad".</p> <p>Los ecosistemas de emprendimiento en Medellín, han tenido una perspectiva positiva en la medida que confluyen cajas de compensación de la región, cámaras de comercio, las unidades de emprendimiento de las Instituciones de Educación Superior, la administración municipal y el sector privado.</p> <p>La ciudad de Medellín es el eje articulador de los ecosistemas de emprendimiento e innovación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Es decir, permitir a la capital del departamento de Antioquia configurarse como Distrito Especial, tendrá efectos en la conurbación metropolitana viéndose así reflejado en un mayor soporte institucional en la vocación económica de la subregión.</p> <p>En asocio con el Foro Económico Mundial, la ciudad de Medellín ha sido definida como la sede para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia y América Latina, lo que genera una gran ventaja comparativa para el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías y desarrollo de proyectos con base tecnológica.</p>
<p>Medellín es la primera ciudad de Hispanoamérica en unirse al conjunto de ciudades de la que hacen parte San Francisco, Tokio, Beijing y Mumbai.</p> <p>Lo anterior supone una confirmación de los avances de la ciudad de Medellín en materia de economías creativas, innovación en todos sus ámbitos y emprendimiento, pero es necesario que el Congreso de la República viabilice ésta iniciativa legislativa que permitirá una herramienta adicional dentro de la consolidación institucional de la ciudad de Medellín.</p> <p><b>5. REUNIONES PREPARATORIAS, MESA TECNICA DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DEL PROYECTO Y APOYOS RECIBIDOS.</b></p> <p>I) Mesa Técnica para la Reglamentación del Proyecto de Ley Orgánica Medellín Distrito, la cual contó con la participación de representantes de la Gobernación de Antioquia, Medellín Como Vamos, la academia y el sector empresarial, el 23 de Julio en el Hotel Dann Carlton<sup>1</sup>.</p> <p>II) Dialogo con EL DIARIO EL COLOMBIANO "Que implicaciones tiene que Medellín sea Distrito" del 24 de junio de 2021.<sup>2</sup></p> <p>III) Palabras en la Promulgación del Acto Legislativo que declara a Medellín en Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación el 15 de julio de 2021.<sup>3</sup></p> <p>IV) Reunión con el Comité Universidad -Empresa- Estado (CUEE), el 31 de mayo de 2021.<sup>4</sup></p> <p>V) Reunión con Jóvenes Medellínenses "Aportes al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín".<sup>5</sup></p> <p>VI) Reunión Directora de Planeación de Antioquia, el 1 de Julio de 2021<sup>6</sup>.</p> <p><sup>1</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1418665649010790401?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1418665649010790401?s=20</a>  <sup>2</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1418722807366705154?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1418722807366705154?s=20</a>  <sup>3</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1408116294914879497?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1408116294914879497?s=20</a>  <sup>4</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1415846112464879618?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1415846112464879618?s=20</a>  <sup>5</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1399447994068520966?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1399447994068520966?s=20</a>  <sup>6</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1395461897378488323?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1395461897378488323?s=20</a></p>	<p>VII) Socialización Concejo del Municipio de Bello , el 1 de Julio de 2021.<sup>7</sup></p> <p>VIII) Socialización Concejo del Municipio de Envigado, el 9 de Julio de 2021.<sup>8</sup></p> <p>IX) Socialización Concejo del Municipio de Itagüí, el 23 de Julio de 2021.<sup>9</sup></p> <p>X) Socialización Concejo de Medellín, el 18 de Junio de 2021.<sup>10</sup></p> <p>XI) Foro Virtual Medellín Distrito, Concejo de Medellín y Senado de la República, 29 de abril de 2021.<sup>11</sup></p> <p>XII) Socialización Concejo del Municipio de Sabaneta, el 25 de junio de 2021.</p> <p><b>6. IMPACTO FISCAL</b></p> <p>De conformidad con lo presentado, pero específicamente con el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en el presupuesto del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto de ley no tiene un impacto fiscal negativo en las finanzas del Gobierno Central o cualquier otra entidad pública, por el contrario, significaría un impulso al desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación para el Distrito Especial de Medellín.</p> <p><b>7. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS O RELACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS</b></p> <p>De conformidad con el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, en la que se estableció que el autor del proyecto presentara en la exposición de motivos un acápite que</p> <p><sup>7</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1410663893983191045?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1410663893983191045?s=20</a>  <sup>8</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1410283506224320520?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1410283506224320520?s=20</a>  <sup>9</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1413532678503211009?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1413532678503211009?s=20</a>  <sup>10</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1418589707118776321?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1418589707118776321?s=20</a>  <sup>11</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1405896401507205120?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1405896401507205120?s=20</a>  <sup>12</sup> <a href="https://twitter.com/sanvalgo/status/1387572484388556808?s=20">https://twitter.com/sanvalgo/status/1387572484388556808?s=20</a></p>



describa las circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto.

Se considera que el presente proyecto de Ley orgánica no genera conflictos de interés en atención a que se trata de un proyecto que no produce un beneficio particular, actual y directo a los congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019; sino que, por el contrario, al tratar de reglamentar el Acto Legislativo 01 de 2021 otorgando nuevas competencias en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación al Distrito Especial de Medellín, el beneficio no puede ser particular.

Así el Consejo de Estado determinó "No cualquier interés configura la causal de pérdida de investidura, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es:

**Directo**, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador;

**Particular**, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y

**Actual o inmediato**, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles.<sup>12</sup>

De los Honorables Congresistas,

  
**SANTIAGO VALENCIA GONZÁLEZ**  
Senador de la República

  
**MARGARITA MARÍA RESTREPO ARANGO**  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA  
ANTIOQUIA

  
**JHON JAIRO BERRÍO LOPEZ**  
Representante a la Cámara

  
**IVÁN DARIO AGUDELO ZAPATA**  
Senador  
Senado de la República

<sup>12</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicación número: Pl. 01180-00 (C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia).

  
**César Eugenio Martínez Restrepo**  
Representante a la Cámara por Antioquia

  
**OSCAR DARIO PÉREZ PINEDA**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Centro Democrático

  
**JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ**  
Senador de la República

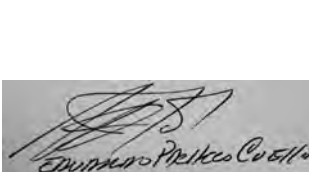
  
**GERMAN BLANCO ÁLVAREZ**  
Representante a la Cámara - Antioquia


  
**Juan Espinal**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Centro Democrático

  
**Paola Holguín**  
Senadora de la República  
Partido Centro Democrático

  
**JOSE OBDULIO GAVIRIA**  
Senador de la República

  
**JUAN FÉLIX LEMOS URIBE**  
Senador de la República

  
**NICOLAS PEREZ VASQUEZ**  
Senador de la República

  
**NICOLAS PEREZ VASQUEZ**  
Senador de la República

  
**JOHN JAIRO BÉRMUDEZ GARCÉS**  
Representante a la Cámara

  
**Mauricio Parodi Díaz**  
Representante a la Cámara

  
**CIRO ALEJANDRO RAMIREZ**  
Senador de la República

  
**PALOMA VALENCIA LASERNA**  
Senadora de la República.

  
**GABRIEL VELASCO**  
Senador de la República

  
**MARIA FERNANDA CABAL MOLINA**  
Senadora de la República de Colombia

  
**OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander  
Partido Centro Democrático

  
**FERNANDO NICOLAS ARAUJO**  
Senador de la República  
Partido Centro Democrático



**C O N T E N I D O**

Gaceta número 953 - Jueves, 5 de agosto de 2021

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA

**Págs.**

Proyecto de ley Estatutaria número 143 de 2021 Cámara, por la cual se crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones..... 1

PROYECTOS DE LEY ORGÁNICA

Proyecto de ley Orgánica número 141 de 2021 Cámara, por medio de la cual se dictan disposiciones para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se dictan otras disposiciones..... 22